



Asamblea General

Sexagésimo noveno período de sesiones

34^a sesión plenaria

Jueves 30 de octubre de 2014, a las 15.00 horas

Nueva York

Documentos oficiales

Presidente: Sr. Kutesa (Uganda)

*En ausencia del Presidente, el Sr. Boureima (Níger),
Vicepresidente, ocupa la Presidencia.*

Se abre la sesión a las 15.05 horas.

Tema 70 del programa (continuación)

Informe de la Corte Internacional de Justicia

Informe de la Corte Internacional de Justicia (A/69/4)

Informe del Secretario General (A/69/337)

Sra. Argüello González (Nicaragua): Primeramente agradezco al Presidente de la Corte Internacional de Justicia, Sr. Peter Tomka, su informe (A/69/4) de esta mañana (véase A/69/PV.33).

Asimismo, Nicaragua se adhiere a lo expresado por la República Islámica del Irán en nombre del Movimiento de los Países No Alineados (véase A/69/PV.33).

Dentro de la proliferación de tribunales internacionales que se ha visto en las últimas décadas, la Corte Internacional de Justicia continúa ejerciendo una función única para los Estados en lo que respecta a la solución pacífica de controversias entre los mismos. Nicaragua, en particular, es firme creyente en el derecho internacional y reconoce la contribución excepcional que el principal órgano judicial de esta Organización ha hecho en la consolidación del derecho internacional. De las 13 causas inscritas en el Registro General de la Corte, Nicaragua es parte como actor y/o demandado en cinco de

ellas, dos de las cuales están pendientes de audiencias orales, ya programadas para 2015. En todas las causas en las que mi país ha sido parte siempre ha cumplido fielmente con sus obligaciones internacionales, y esperamos la reciprocidad en el cumplimiento de la obligación de acatar los fallos de la Corte Internacional de Justicia en las causas en que se es parte, a la vez que recordamos que la existencia de una controversia no será motivo para que cualquiera de los Estados partes en tal controversia recurra a la fuerza o a la amenaza del uso de la fuerza.

En relación al reconocimiento de la jurisdicción de la Corte, es notorio que en 2014 se haya registrado un número récord de demandas —un total de siete— en las que se funda la competencia de la Corte en el consentimiento futuro del demandado. La situación creada por este tipo de solicitudes pone de relieve la importancia de cumplir con el compromiso de los Estados de promover el estado de derecho a nivel internacional y la solución pacífica de controversias, la última de ellas, obligación contraída en la Carta, y la anterior, un compromiso de los Estados Miembros reafirmado cada año y, en particular, en 2012, durante la Reunión de Alto Nivel sobre el estado de derecho en los planos nacional e internacional (véase A/67/PV.3-A/67/PV.5).

En ese sentido, es oportuno recordar que la Asamblea General ha observado en más de una ocasión que el recurso al arreglo judicial a las controversias jurídicas, en particular su remisión a la Corte Internacional de Justicia, no debería ser considerado un acto inamistoso entre los Estados. Por lo que Nicaragua considera

La presente acta contiene la versión literal de los discursos pronunciados en español y la traducción de los demás discursos. Las correcciones deben referirse solamente a los discursos originales y deben enviarse con la firma de un miembro de la delegación interesada, incorporadas en un ejemplar del acta, al Jefe del Servicio de Actas Literales, oficina U-0506 (verbatimrecords@un.org). Las actas corregidas volverán a publicarse electrónicamente en el Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones Unidas (<http://documents.un.org>).

14-59740 (S)



Documento accesible

Se ruega reciclar



que valdría la pena reflexionar sobre la oportunidad que representa esta situación excepcional de demandas fundadas en el consentimiento futuro, situación que justamente pone de relieve la importancia de promover la aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte por parte de todos los Estados.

En este sentido, Nicaragua celebra que cada año algún Estado se sume al reconocimiento de la jurisdicción obligatoria de la Corte a través de la declaración provista en el Estatuto. No obstante, lamentamos que aún el número de estas declaraciones —70, en este caso— sea bajo en comparación con los 193 Estados Miembros de esta Organización. La celebración del septuagésimo aniversario de la Corte, prevista para el 18 de abril de 2016, proveerá una oportunidad singular para que previo a dichos actos más Estados hagan sus declaraciones conforme al Estatuto o retiren sus reservas. De esta forma, los Estados pueden contribuir a que la celebración sea aún más significativa con un número récord de reconocimiento de la jurisdicción de la Corte.

En cuanto al presupuesto, es evidente que el incremento de la carga de trabajo de la Corte, reflejada no solo en el número de causas nuevas inscritas en este período —siete a tener cuenta—, sino también en la progresiva complejidad del objeto de las causas radicadas, las cuales requieren de asesorías técnicas complejas, implican la necesidad de ajustar los recursos financieros y humanos de esta institución a esta realidad, realidad que nuestras delegaciones deben tener presente en el momento de las deliberaciones en la Quinta Comisión para brindar un soporte adecuado a estas labores.

Es de notar que la falta de recursos adecuados obliga a veces a la Corte a recargar los costos de ciertos procedimientos, tales como algunas traducciones a las partes, lo cual representa un perjuicio para los países menos pudientes. Por otro lado, es de suponer que la Corte evita en lo posible, la contratación de peritos, que a veces puede redundar en desventaja también para los Estados menos pudientes. También, en relación a cuestiones presupuestarias, se debe considerar dentro de estas deliberaciones la importancia de las publicaciones de las sentencias y alegatos, en cuanto contribuyen a la labor de difusión y tienen un papel importante en la esfera académica. Finalmente, es conveniente recordar la necesidad de contribuir al Fondo Fiduciario del Secretario General para asistir a los Estados en el arreglo de controversias por conducto de la Corte Internacional de Justicia.

Hoy por hoy, las amenazas a la paz y la seguridad internacionales son diversas y sofisticadas, y no dejan

de recordarnos la importancia de fomentar el desarrollo de las relaciones de amistad entre los Estados, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y sociales o de su nivel de desarrollo. El desarrollo y el fortalecimiento de esas relaciones amistosas entre los Estados es posible, en la medida que cualquier disputa sea solucionada permanentemente por los medios ofrecidos por el derecho internacional, del cual la Corte es una de sus más respetadas instituciones y el órgano principal judicial de esta Organización.

Agradecemos nuevamente la presentación de este informe y señalamos que aunque aún queda mucho por hacer, por el respeto de la justicia y el derecho internacional, tenemos ante nosotros oportunidades invaluable que debemos tomar para poder alcanzar la paz, propósito fundamental de las Naciones Unidas y anhelo permanente de la humanidad.

Sr. Nduhuura (Uganda) (*habla en inglés*): Doy las gracias al Presidente por la oportunidad de dirigirme a la Asamblea sobre este importante tema. Deseo empezar agradeciendo al Presidente de la Corte Internacional de Justicia, Magistrado Tomka, su exhaustivo informe (A/69/4).

Permítaseme tratar brevemente cuestiones señaladas en el Capítulo V, sección 2 del informe, con el subtítulo “Actividades armadas en el territorio del Congo (*República Democrática del Congo c. Uganda*)”. La Corte decidió que ambas partes tenían la obligación de reparar los daños causados. Las disposiciones también fueron provistas para que las partes llegaran a un acuerdo sobre la cuestión de los reparos. De hecho, se señala que las partes han continuado enviando a la Corte información relativa a las negociaciones para zanjar las cuestiones pendientes.

Uganda sigue participando en este proceso, al haber un mecanismo para gestionar este aspecto particular de la decisión de la Corte. Hay un equipo de negociación que se está ocupando de la cuestión y seguimos informando a la Corte sobre el estado de las negociaciones. La próxima reunión de los equipos de negociación se celebrará el 17 de noviembre, y se informará a la Corte en cuanto a los avances que se logren.

Acogemos con beneplácito las mejoras que se han logrado como resultado de la buena gestión de las cuestiones ante la Corte. La administración de la justicia debe ser oportuna porque con retraso se trata de justicia denegada.

Como ferviente creyente en el estado de derecho, Uganda apoya la labor de la Corte Internacional de Justicia. Como principal órgano judicial de las Naciones

Unidas, la Corte Internacional de Justicia sigue desempeñando un papel positivo en la promoción del estado de derecho y, por consiguiente, en la mejora del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Cabe resaltar que durante el período que se examina la Corte ha registrado un incremento de sus actividades, sobre todo en sus fallos y opiniones consultivas. Esto demuestra el aprecio del que goza la institución, pero lo que es aún más importante, pone de relieve el creciente compromiso de los Estados con el estado de derecho y la solución pacífica de las cuestiones contenciosas.

Como resultado de esta participación, Uganda mantiene relaciones de paz con la República Democrática del Congo, y ambos Estados mantienen también relaciones cordiales. Ello ha permitido que los dos países vecinos cooperen en varias cuestiones de interés común, como, por ejemplo, la seguridad y el comercio. De hecho, las relaciones cordiales existentes han permitido un comercio transfronterizo, la intercomunicación por carretera, la lucha contra el comercio ilegal de minerales y el abastecimiento de electricidad a algunas partes en el este de la República Democrática del Congo, por mencionar algunos ejemplos. Para concluir, Uganda y la República Democrática del Congo seguirán colaborando de manera constructiva e informando periódicamente sobre los avances logrados.

Sr. Elias-Fatile (Nigeria) (*habla en inglés*): En estos momentos en los que Nigeria comparte con la República de Zambia su dolor por el fallecimiento del Excmo. Presidente Michael Sata el pasado martes, deseamos expresar nuestra gratitud a las delegaciones por sus condolencias por el fallecimiento del esposo de la Embajadora Ogwu, este lunes.

Agradezco al Presidente la convocación de este importante debate sobre el informe de la Corte Internacional de Justicia. Mi delegación agradece al Presidente de la Corte Internacional de Justicia, Magistrado Peter Tomka, la presentación de su informe (A/69/4).

Nigeria hace suya la declaración formulada por el Representante Permanente de Sudáfrica en nombre del Grupo de los Estados de África (véase A/69/PV.33).

La Corte Internacional de Justicia es parte integral de los mecanismos de las Naciones Unidas para promover con independencia e imparcialidad el estado de derecho y la paz y la seguridad internacionales. Nigeria considera que la Corte es el mecanismo preeminente para el arreglo pacífico de controversias entre Estados, y cabe resaltar que muchos Estados han expresado su confianza en la capacidad de la Corte para resolver sus

controversias. La doble función de la Corte como órgano judicial principal de las Naciones Unidas y tribunal con jurisdicción única y universal le permite emitir decisiones imparciales con miras al arreglo pacífico de controversias. Los fallos y las opiniones consultivas de la Corte han tenido efectos beneficiosos para el mantenimiento de la paz y la seguridad y en todas las regiones.

En virtud de los párrafos 2 y 5 del Artículo 36 del Estatuto de la Corte, se espera que los Estados hagan una declaración en la que reconozcan la jurisdicción obligatoria de la Corte. Sin embargo, Nigeria observa con preocupación que de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas que son partes en el Estatuto de la Corte, hasta ahora solo 70 han hecho una declaración, con reservas en algunos casos, en la que reconocen la jurisdicción de la Corte como obligatoria. Por ese motivo, mi delegación alienta a los Estados Miembros que todavía no se hayan sometido a la jurisdicción obligatoria de la Corte a que procuren hacerlo, ya que ello contribuiría a fortalecer la capacidad de la Corte de promover la justicia internacional y el arreglo pacífico de controversias.

Nigeria es consciente de la importancia de la Corte en la resolución de controversias entre Estados relativas a una amplia gama de cuestiones complejas, un papel que ha contribuido en gran medida a la paz y la armonía en el mundo. Habida cuenta de esa importante función de la Corte, Nigeria opina que su presupuesto debería estar a la altura de sus necesidades y obligaciones y apuntalar su independencia a la hora de prestar servicios esenciales a la comunidad internacional. Por ello tomamos nota con agradecimiento de que la mayoría de las solicitudes presupuestarias de la Corte han sido aceptadas por las Naciones Unidas, lo que le ha permitido seguir desarrollando su misión sin trabas y nos parece encomiable.

Como Estado parte en el Estatuto de la Corte que ha hecho una declaración a fin de reconocer la jurisdicción de la Corte como obligatoria, Nigeria sigue ateniéndose a su compromiso de promover la justicia internacional y el arreglo pacífico de controversias. Alentamos a todos los Estados Miembros a seguir brindando su apoyo a las actividades de la Corte con el fin de promover la justicia internacional y el estado de derecho.

Sr. Troncoso (Chile): En primer lugar, mi delegación desea expresar su reconocimiento a la labor desarrollada por la Corte Internacional de Justicia en el período que comprende el informe (A/69/4) que nos acaba de presentar de su Presidente, Peter Tomka. En

dicho lapso, la Corte ha tenido la oportunidad de decidir asuntos referidos a materias tan diversas como la delimitación marítima, la caza de las ballenas en aguas de la Antártica y la interpretación de fallos emitidos por la propia Corte, entre muchas otras materias, en el ejercicio de su competencia contenciosa.

La Corte, como órgano judicial principal de las Naciones Unidas, desempeña una labor fundamental e insustituible en la interpretación y aplicación del derecho internacional, aportando sus decisiones a la solución de las controversias y generando una jurisprudencia que constituye una contribución a la precisa determinación del derecho internacional aplicable. En este sentido, creemos que los Estados debemos apoyar decididamente el trabajo que lleva a cabo la Corte.

Chile ha reconocido en diversos instrumentos internacionales la competencia de este alto tribunal y valora que la solución obligatoria de controversias esté vinculada a dichos instrumentos internacionales, que mediante sus cláusulas compromisorias permiten recurrir a este mecanismo para superar las diferencias que pudieran surgir en su aplicación. El papel que ha venido teniendo el Pacto de Bogotá en cuanto fuente de la competencia de la Corte ha sido puesto de relieve y, en homenaje al mismo, mi país reitera una vez más la doctrina de que dicho Pacto fue negociado en la convicción de que no puede ser aplicado para conocer de asuntos ya resueltos por arreglos entre las partes por laudo arbitral o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del referido instrumento.

Asimismo, es un punto central para mi país el respeto al derecho internacional, y en especial a los tratados internacionales. En este espíritu hemos dado cumplimiento de buena fe a la reciente sentencia de la Corte Internacional de Justicia que nos afectó, así como a los fallos de otros tribunales internacionales. En este sentido, permítaseme recordar la declaración que formulara mi país el 27 de enero del presente año al término de la lectura del fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia en el *Contencioso sobre delimitación marítima (Perú c. Chile)*. En esa oportunidad, sin perjuicio de manifestar su discrepancia con ciertos elementos de la decisión, Chile se comprometió a cumplir el fallo y destacó aquellos aspectos que requerirían de un trabajo de las partes para una completa ejecución.

Así, se procedió en lo relativo a la elaboración conjunta con el Perú de la cartografía que determina las exactas coordenadas geográficas de los puntos del límite

marítimo enunciado por la Corte, con un espíritu de buena vecindad tal como lo dispuso la Corte en su sentencia. A este respecto, cabe destacar que ambos Gobiernos han declarado que harán una entrega conjunta a las Naciones Unidas de la cartografía producto de dicha actividad. Al mismo tiempo, se están llevando a cabo modificaciones normativas para una aplicación más efectiva del derecho del mar, conforme al espíritu y sentido del fallo de la Corte Internacional de Justicia antes indicado.

Mi país actualmente enfrenta ante la Corte la demanda presentada por el Estado Plurinacional de Bolivia en la que solicita que se obligue a negociar a Chile un acceso soberano al Océano Pacífico. Chile, en pleno respeto del derecho internacional y, en particular, de las disposiciones contenidas en el Pacto de Bogotá y en el Estatuto de la Corte y en su Reglamento, ha presentado gestiones preliminares a la competencia de la Corte en este caso, que corresponderá resolver a la propia Corte.

Por último, creemos que es importante otorgar un respaldo decidido a la discusión sobre la significativa labor que desarrolla la Corte Internacional de Justicia. En este sentido recordamos la posición reiterada en este órgano, a saber, la necesidad de contar con versiones en español de las sentencias que emita la Corte así como de incrementar las oportunidades de encuentros académicos en distintas partes del mundo en los que se aborden los principales problemas y desafíos futuros que enfrenta el derecho internacional y, en particular, la solución judicial de controversias de la cual la Corte Internacional de Justicia es un instrumento fundamental.

Sr. Koncke (Uruguay): Quisiera comenzar agradeciendo al Sr. Presidente de la Corte Internacional de Justicia, Magistrado Peter Tomka, por presentar el informe de actuación anual de la Corte (véase A/69/PV.33). El mismo (A/69/4) destaca la importante labor desarrollada por la Corte en el presente año y demuestra la adhesión a este medio pacífico de solución de controversias por parte de la comunidad internacional. Cada año que pasa, el ingreso de nuevas causas y los fallos dictados, no hacen más que confirmar el prestigio de la Corte como órgano de solución de controversias internacionales y reafirmar que es el órgano judicial principal en el sistema de las Naciones Unidas.

Mi país, el Uruguay, ha defendido desde el comienzo de su existencia la solución pacífica de controversias en todas sus expresiones, de acuerdo a lo que consigna la Carta de las Naciones Unidas. Entre los medios citados en el Artículo 33 de la Carta, en particular hoy destacamos el arreglo judicial o la recurrencia a los tribunales

internacionalmente constituidos a fin de proporcionar justicia, dirimiendo las diferencias de conformidad al derecho internacional. Observamos que, paulatinamente, tanto por iniciativa directa de los países como a través de cláusulas que se incorporan a los tratados internacionales, la jurisdicción de la Corte se ha ido ampliando y de esa forma la razón, la justicia y el derecho le han ido ganando terreno a la arbitrariedad y a la fuerza.

El Uruguay se enorgullece de haber sido el primer país del mundo que asumió la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia en el año de su creación. De hecho, lo hizo a comienzos del año 1921 cuando se creó su antecesor, es decir, el Tribunal Permanente de Justicia Internacional en el marco de la Sociedad de las Naciones. Dicho accionar ha pautado el comportamiento y compromiso del Uruguay en la escena internacional, apostando a la solución pacífica de controversias, a la primacía del derecho y de la justicia sin imposiciones de ninguna clase, salvo las que establecen el actuar de conformidad con el derecho internacional.

En ese sentido, queremos destacar que mi país hace un par de años comenzó un trabajo con Suiza, Holanda y el Reino Unido, al que posteriormente se unieron Lituania, el Japón y Botswana, países que pertenecen a todos los grupos regionales que actúan ante las Naciones Unidas, en un proyecto de tener un manual que contribuya a que los Miembros de la Organización en forma paulatina vayan adoptando la jurisdicción compulsiva de la Corte Internacional de Justicia. Dicho manual fue concluido a mediados del presente año y a la fecha se encuentra traducido a tres idiomas oficiales de las Naciones Unidas, hallándose también en proceso de ser traducido a los restantes idiomas oficiales, a fin de poder llegar a todos los Estados que conforman la membresía.

Dicho manual está dirigido principalmente a los funcionarios de Gobierno que tratan con temas de justicia internacional, contando con ejemplos prácticos, para así contribuir a la futura toma de decisión de adoptar la jurisdicción obligatoria de la Corte. Esta tarea, entendemos, no es más que una demostración del compromiso de este grupo de países con la justicia internacional y su adopción como principal sistema de solución de controversias a nivel internacional.

Indudablemente, el recurrir a la Corte Internacional de Justicia ha contribuido, y entendemos que continuará contribuyendo, a evitar enfrentamientos y conflictos, que antes de la existencia de ésta se resolvían generalmente mediante la fuerza. En otro orden de cosas, somos

conscientes de que las opiniones consultivas que figuran en el Artículo 96 de la Carta y en el Capítulo IV del Estatuto de la Corte han servido para arrojar luz sobre cuestiones jurídicamente dudosas y a su vez hemos notado que desde el año 2010 no se han solicitado opiniones consultivas a la Corte. Entendemos que sería interesante explorar la posibilidad de que dicha competencia consultiva pudiera ser ampliada también a consultas que eventualmente efectúen los Estados partes.

Con el ánimo de concluir, deseo expresar que no nos queda más que abrigar la esperanza de que cada vez más Estados asuman la jurisdicción de la Corte para dirimir sus diferencias, reafirmando de este modo a la justicia internacional en un lugar de distinción en la solución pacífica de controversias.

Sra. Hamilton (Estados Unidos de América) (*habla en inglés*): Queremos dar las gracias al Magistrado Tomka por su liderazgo como Presidente de la Corte Internacional de Justicia y por su reciente informe sobre las actividades de la Corte durante el año transcurrido (A/69/4).

Nos sorprende una vez más el alto nivel de productividad de la Corte. Durante el año transcurrido la Corte emitió 3 fallos y 13 providencias. Además, la Corte tiene ante sí siete nuevas causas contenciosas, lo que eleva a 13 el número de casos que figuran en la lista de la Corte. Esos casos abarcan una gama muy amplia de cuestiones.

La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. En el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas se subraya que sus redactores están decididos “a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional”. Ese es el objetivo fundamental del sistema consagrado en la Carta y, en particular, de la función de la Corte.

Al acercarnos a su septuagésimo aniversario y evaluar su labor, resulta evidente que la Corte Internacional de Justicia ha hecho contribuciones significativas en numerosas esferas del derecho internacional.

Nos interesa señalar que, como explicó el Presidente Tomka en su presentación del informe (véase A/69/PV.33), las causas sometidas a la Corte han cobrado mayor complejidad, tanto desde el punto de vista fáctico como jurídico y con frecuencia conllevan varias etapas. También encomiamos el detenimiento con que la Corte desarrolló su enfoque en lo relativo a la investigación de los hechos. Creemos que la aplicación de

procesos rigurosos de determinación de los hechos aumentará la confianza en la Corte. Nos interesa también que la Corte haya adoptado varias medidas encomiables para estar en condiciones de responder a las solicitudes de medidas provisionales. Esperamos que la Corte siga recibiendo los recursos necesarios para el cumplimiento de sus importantes funciones.

Queremos destacar también la constante actividad de divulgación de la Corte para sensibilizar a los sectores clave de la sociedad —los profesores y estudiantes de derecho, los funcionarios judiciales y funcionarios del Gobierno y el público en general— respecto de la labor de la Corte y aumentar la comprensión sobre su tarea. En lo relativo a la transparencia, observamos en particular que actualmente es posible ver las grabaciones de la Corte, en directo y a demanda, en los servicios de transmisión del sitio web de las Naciones Unidas. Todas estas iniciativas complementan y amplían los esfuerzos de las Naciones Unidas por promover el estado de derecho a nivel mundial, así como un mejor entendimiento del derecho internacional público.

Para concluir, esperamos con interés, en menos de dos años, la celebración del septuagésimo aniversario de la Corte —poco después del septuagésimo aniversario de las Naciones Unidas—, que ofrecerá una oportunidad para reflexionar sobre la impresionante jurisprudencia desarrollada por la Corte. Queremos expresar también nuestro agradecimiento por la ardua labor del Presidente Tomka, los otros magistrados que se desempeñan actualmente en la Corte y todos los miembros del personal de la Corte que contribuyen a diario a que esa institución continúe su productiva labor.

Sr. Hilale (Marruecos) (*habla en francés*): Permítaseme en primer lugar dar las gracias al Magistrado Peter Tomka, Presidente de la Corte Internacional de Justicia, por su exposición informativa y por el informe (A/69/4) en que se describe la labor de la Corte entre el 1 de agosto de 2013 y el 31 de julio de este año. Quiero también expresar mi reconocimiento a los magistrados que están presentes hoy entre nosotros.

Mi delegación se suma a las declaraciones formuladas por los representantes de la República Islámica del Irán en nombre del Movimiento de los Países No Alineados y de Sudáfrica en nombre del Grupo de los Estados de África (véase A/69/PV.33). Voy a formular los siguientes comentarios en mi calidad de representante de mi país.

La Corte Internacional de Justicia, establecido por la Carta de las Naciones Unidas, es el principal órgano

judicial de las Naciones Unidas. Es el único tribunal internacional con autoridad universal que tiene doble jurisdicción y que aborda causas contenciosas y ofrece opiniones consultivas. Por ese motivo, sus decisiones relativas a las controversias entre los Estados son las más accesibles y solicitadas. A pedido de los Estados y en ejercicio de la soberanía de los mismos, la Corte se pronuncia sobre controversias bilaterales o trilaterales. Ello revela que confían en la Corte. Por lo tanto, no nos sorprende observar que, al 31 de julio, 193 Estados eran partes en el Estatuto de la Corte. De la misma manera, más de 300 tratados y convenciones bilaterales o multilaterales prevén la competencia de la Corte para la solución de controversias relacionadas con su aplicación o interpretación.

En relación con las opiniones consultivas, además del Consejo de Seguridad y la Asamblea General que, con arreglo al párrafo 1 del Artículo 96 de la Carta, están facultados para solicitar a la Corte que emita opiniones consultivas sobre cualquier cuestión jurídica, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Comisión Interina de la Asamblea General, así como las organizaciones internacionales, han utilizado los servicios de la Corte. Por lo tanto, debido a su independencia e imparcialidad, la Corte Internacional de Justicia se ha afianzado como el máximo órgano judicial del sistema de las Naciones Unidas.

La influencia de la Corte trasciende las decisiones y opiniones que emite. Muchas controversias se solucionaron rápidamente por la simple sugerencia de una de las partes de someter la controversia a la Corte. Además, la práctica revela que las controversias que se someten a la Corte a veces se solucionan simplemente porque las medidas provisionales contribuyen a su solución y no debido a una decisión de la Corte.

A ese respecto, puede citarse el ejemplo de la causa relativa a las *Actividades armadas en el territorio del Congo (República Democrática del Congo c. Uganda)* en que, tras el fallo de la Corte, las dos partes

“[t]enían la obligación recíproca de reparar los daños causados. Decidió que, si las partes no llegaban a un acuerdo, la cuestión de la reparación sería resuelta por la Corte. La Corte reservó la continuación del procedimiento a tal efecto. Desde entonces, las partes han transmitido a la Corte cierta información sobre las negociaciones que están celebrando con miras a resolver la cuestión de la indemnización, según lo indicado en los puntos 6 y 14 de la parte dispositiva del fallo y los párrafos 260, 261 y 344 de los considerandos del fallo (A/69/4, párr. 79).

De la misma manera, el Ecuador y Colombia dieron las gracias a la Corte por su contribución a la amistosa solución de su controversia relativa a la fumigación aérea con herbicidas.

Como se indica en el informe, el 13 de septiembre de 2013, de conformidad con los párrafos 2 y 3 del artículo 89 del Reglamento de la Corte, el Presidente de la Corte dejó constancia del desistimiento por el Ecuador de la demanda interpuesta y ordenó que se suprimiera del Registro General de la Corte la causa mencionada.

De esa manera, la Corte desempeña una función que alienta la negociación, administrando cierta justicia de transacción para las partes y dándoles la oportunidad de solucionar sus controversias entre ellas mediante la negociación. De esa forma, la Corte ha prestado un inestimable servicio a las partes en las controversias y ha desempeñado una valiosa función al facilitar la negociación.

Además, la actividad de la Corte en su conjunto forma parte de la búsqueda general del arreglo pacífico de controversias, por una parte, y de la promoción del estado de derecho, por otra. Sus fallos y opiniones consultivas contribuirán necesariamente a la aclaración del derecho internacional y representarán un aporte importante a la primacía del derecho en beneficio de la paz. Además, la Corte desempeña un papel positivo muy importante y complementario al que desempeña el Consejo de Seguridad para procurar la paz y la seguridad internacionales.

En el período que abarca el informe, la Corte se ocupó de siete nuevas causas contenciosas y dictó 13 providencias. Ello revela que se recurre cada vez más a la Corte sobre diversos temas relacionados con distintas controversias territoriales y marítimas, las violaciones de la integridad y la soberanía territoriales, el genocidio, el daño ambiental y la conservación de los recursos biológicos, la interpretación y la aplicación de los convenios y tratados internacionales, los pedidos de poner fin a la carrera de armamentos nucleares, entre otras cosas. Todo ello es prueba de una evaluación positiva y de un alto grado de satisfacción, confianza y eficiencia, que contribuyen a la universalidad de la Corte.

Esa amplia esfera de trabajo exige la movilización de recursos humanos calificados y de recursos financieros suficientes a fin de mantener un alto grado de eficacia, calidad e imparcialidad. La Corte ha pasado a ser parte de una dinámica que le permite participar de manera creciente en la vida internacional. Ello ha redundado en interés del respeto a la primacía del derecho. Por lo tanto, mi delegación celebra que se haya

respondido a la mayoría de las solicitudes presupuestarias para el bienio 2014-2015.

Los fallos, las opiniones consultivas y las decisiones de la Corte merecen ser ampliamente difundidos y publicados, sobre todo en las escuelas de derecho y especialmente en mi continente, África, a fin de divulgar mejor los valores de la Corte y los principios que rigen el arreglo pacífico de controversias y de contribuir a la diplomacia preventiva. El Presidente de la Corte, el Secretario, los magistrados y los altos funcionarios de la Corte deben organizar conferencias en las universidades y las academias diplomáticas para que la Corte se conozca mejor. La Academia Diplomática del Reino de Marruecos se sentirá encantada y honrada de recibir al Presidente de la Corte, al Secretario o a sus magistrados para que organicen conferencias destinadas a estimular la curiosidad intelectual de los jóvenes diplomáticos a fin de que se familiaricen con la función de la Corte. De la misma manera, el Reino de Marruecos es sede de una de las universidades más antiguas y prestigiosas del mundo, la Universidad de Al-Karaouine, fundada en 857, cuyos laureados han contribuido con su pensamiento a la evolución del derecho internacional. La universidad posee una gran biblioteca que contiene tesoros manuscritos y obras que datan de siglos anteriores hasta el presente. Contar con las publicaciones de la Corte en la universidad sería sumamente útil para los investigadores y los estudiantes, sean de Marruecos o extranjeros.

Antes de concluir, quiero señalar una vez más que mi delegación valora especialmente la importante función que desempeña la Corte en el arreglo pacífico de controversias, así como la valiosa contribución que realiza en favor del fortalecimiento y la interpretación de las normas del derecho internacional.

Sr. Andrianarivelo-Razafy (Madagascar) (*habla en francés*): La delegación de Madagascar se adhiere a la declaración formulada por el representante de Sudáfrica en nombre del Grupo de los Estados de África (véase A/69/PV.33).

Damos las gracias al Presidente de la Corte Internacional de Justicia, el Magistrado Peter Tomka, que está presente aquí, por su excelente presentación relativa a las actividades de la Corte del año anterior, que nos permitió apreciar los esfuerzos que realizó ese órgano en el desempeño de sus tareas. Leímos con interés el informe de la Corte Internacional de Justicia (A/69/4).

El mundo enfrenta muchos desafíos que exigen nuestra atención y nuestra acción colectiva. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la Corte

Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Por lo tanto, forma parte del sistema de las Naciones Unidas y está al servicio de la Organización y de sus Estados Miembros. Su mandato es único. Su carácter universal hace que ese órgano internacional sea el mecanismo preferido y el instrumento estratégico para solucionar las controversias de manera pacífica. El aumento en el volumen de las causas que examina la Corte demuestra la confianza que los Estados han depositado en la Corte. Al adoptar un espíritu de imparcialidad e independencia de conformidad con el derecho internacional, la Corte Internacional de Justicia promueve el estado de derecho al tiempo que sus decisiones se basan en criterios jurídicos a fin de emitir fallos justos y bien fundados.

Mejorar el acceso a la justicia es un medio esencial para fortalecer los vínculos entre el estado de derecho y los tres pilares del sistema de las Naciones Unidas. Como principal órgano judicial, la Corte Internacional de Justicia desempeña un papel esencial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, así como en las cuestiones fundamentales para el desarrollo. Su vasta competencia, que se extiende a todos los casos que han sido sometidos por las partes y a todas las cuestiones especialmente previstas en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados, convenios y convenciones vigentes, ofrece a los Estados Miembros un instrumento eficaz para solucionar sus diferencias.

Por esa razón, es esencial el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte. Esa jurisdicción abarca tanto las cuestiones contenciosas como las consultivas. En la actualidad, 70 Estados Miembros, entre ellos Madagascar, han reconocido la competencia de la Corte para la solución de controversias. Pedimos a los Estados que aún no lo han hecho que reconozcan su jurisdicción. Expresamos nuestro agradecimiento por la iniciativa que presentaron Suiza, los Países Bajos y otros Estados en la Reunión de Alto Nivel sobre el estado de derecho en los planos nacional e internacional, que se celebró el 24 de septiembre de 2012 (véase A/67/PV.3-A/67/PV.5) a fin de colaborar con la Secretaría en la elaboración de un manual para prestar asistencia a los Estados en la aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia (A/68/963, anexo). Esta iniciativa refleja el deseo de promover la competencia obligatoria de la Corte como vía pacífica para solucionar las controversias y muestra el apoyo que le brindan los Estados Miembros de todas las regiones del mundo.

En relación con las actividades de la Corte, apreciamos las diversas iniciativas que ha tomado la Corte

durante las visitas de personas y funcionarios de alto nivel, especialmente el intercambio de opiniones sobre la cooperación entre la Corte y la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, la el papel del derecho internacional en el mundo moderno, la jurisprudencia de la Corte y su papel en el sistema jurídico internacional, la organización de un seminario para los miembros de la Corte de Justicia de África Oriental y la Corte Suprema de la República Unida de Tanzania, y la visita de académicos, investigadores y expertos jurídicos. Todo esto muestra que la Corte ha prestado una atención constante a la promoción del derecho internacional en el mundo moderno, ya que el derecho internacional es la base fundamental del estado de derecho. Acogemos también con beneplácito las celebraciones del centenario del Palacio de la Paz en La Haya, así como el debate sobre estas cuestiones que se llevó a cabo en esa ocasión.

La Corte ha realizado loables esfuerzos para publicar sus decisiones y desarrollar recursos multimedia y sitios web para los gobiernos de los Estados Miembros, ya que la situación mundial exige que todos los Estados contribuyan a solucionar las cuestiones que afectan al mundo. A tal fin, apoyamos el pedido de la Corte de financiar la celebración de su septuagésimo aniversario. Reconocemos que el año 2014 fue satisfactorio para la Corte. En ese contexto, Madagascar acoge con beneplácito la perspectiva de celebrar el año próximo con todos los Estados Miembros el septuagésimo aniversario de esa prestigiosa institución.

Sr. Zagaynov (Federación de Rusia) (*habla en ruso*): La Federación de Rusia reconoce especialmente la labor de la Corte Internacional de Justicia como principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Damos las gracias al Presidente de la Corte, Magistrado Peter Tomka, por su detallado informe (A/69/4). En el informe se observa que los Estados siguen pidiendo a la Corte Internacional de Justicia que aborde sus controversias, lo que muestra un muy alto grado de confianza en la Corte. Actualmente, los principios de justicia y las opiniones autorizadas desarrollados por la Corte Internacional de Justicia han pasado a ser directrices reales para las decisiones políticas y jurídicas adoptadas por los Estados.

Hace ya algunos años que la Corte Internacional de Justicia está sumamente ocupada. Los temas que aborda y su alcance geográfico son cada vez más diversos. Actualmente, la Corte se pronuncia no solo sobre controversias relativas a la delimitación de espacios terrestres y marítimos, que es lo que esencialmente hacía en las primeras etapas de su existencia, sino que también tiene ante sí casos que se refieren a todo tipo de cuestiones.

Si bien tiene un programa de trabajo muy intenso, ello no ha afectado la calidad de las decisiones que adopta. Como se señala en el informe, es importante, que la Corte siga realizando una contribución real a fin de garantizar el estado de derecho en el ámbito internacional. Todo lo que hace la Corte está destinado a alentar el estado de derecho. Acogemos con satisfacción la decisión de la Corte de publicar de la manera más amplia posible todas sus decisiones, desarrollar sitios web y trabajar con las universidades. Esas iniciativas merecen nuestro pleno apoyo.

Pensamos que los acontecimientos para celebrar el septuagésimo aniversario de la Corte Internacional de Justicia deben ser una de las prioridades del programa de las Naciones Unidas del año próximo. Creemos que, dada la innegable contribución realizada por la Corte y sus miembros a fin de garantizar la justicia y el estado de derecho, la Asamblea debe responder muy cuidadosamente a las preocupaciones expresadas por el Magistrado Tomka respecto del apoyo material que debe prestarse a la Corte y los magistrados, sobre todo en lo relativo al tema de las pensiones.

A principios de noviembre se celebrarán elecciones para elegir cinco nuevos miembros de la Corte. Estamos seguros de que las vacantes se llenarán con magistrados excelentes.

Sr. Mendoza-García (Costa Rica): Es para mí un honor participar en la sesión anual de la Asamblea General que considera el informe (A/69/4) sobre las labores de la Corte Internacional de Justicia, único tribunal internacional de naturaleza universal que cuenta con competencia general. Mi delegación agradece al Magistrado Peter Tomka, Presidente de la Corte, la presentación del informe de labores correspondiente al período 2013-2014, y su comparecencia ante esta Asamblea.

Durante el período incluido en el informe, la labor de la Corte fue particularmente intensa, habiéndose pronunciado 3 fallos, dictado 13 providencias, celebrado 4 visitas públicas, además de ocuparse de 7 nuevas causas contenciosas.

La solución pacífica de los diferendos internacionales es un fin esencial de las Naciones Unidas. Por eso el rol de la Corte en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y en la promoción del estado de derecho a nivel internacional es esencial. De aquí la responsabilidad de las Naciones Unidas y de sus Estados Miembros de respaldarla en el cumplimiento de sus tareas. Este apoyo requiere que la Organización asegure que la Corte pueda continuar atendiendo eficiente

y objetivamente, con absoluta independencia jurídica y procesal, los casos sometidos a su consideración. Lo anterior solo es posible si se garantiza a la Corte los recursos necesarios para el cumplimiento de su mandato, tomando en consideración el sustancial aumento en su carga de trabajo. En este sentido, celebramos que la mayoría de las solicitudes presupuestarias de la Corte hayan sido aceptadas, esto permitirá desempeñar su misión en condiciones óptimas.

Costa Rica estima necesario que se examine la posibilidad de incorporar el idioma español como idioma oficial de trabajo de la Corte Internacional de Justicia.

Un requisito básico para el fortalecimiento del estado de derecho y de la Corte misma, es que los Estados respeten y acaten sus decisiones, tanto los fallos como las providencias y, por ende, todas las medidas cautelares impuestas, sin excepción. Dicho acatamiento debe ser completo y de buena fe, para así garantizar la integridad de cada proceso y consolidar el indiscutible papel de la Corte en el aseguramiento de la justicia y la paz. Adicionalmente, la Organización debe plantearse la posibilidad de dar seguimiento a esas decisiones y evidenciar los casos de incumplimiento, con el fin de evitar las situaciones de desacato que violen el estado de derecho.

Aunque 193 países son partes en Estatuto de la Corte, solo 70 han formulado declaraciones reconociendo la jurisdicción obligatoria de la Corte de acuerdo al Artículo 36 párrafos 2 y 5. Costa Rica, que aceptó dicha jurisdicción obligatoria desde 1973, ha notado con preocupación que en años recientes el número de países que reconoce la jurisdicción obligatoria de la Corte no ha aumentado. Aunque esto no ha afectado la actividad judicial en la Corte, invitamos respetuosamente a los Estados que aún no lo han hecho, a que consideren hacer uso del mecanismo previsto en el Artículo 36 del Estatuto de la Corte.

A través de los años la Corte ha hecho significativas contribuciones al desarrollo del derecho internacional mediante sus fallos y opiniones consultivas, desde que resolvió la primera disputa relativa al *Canal de Corfú (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte c. Albania)*. En este sentido celebramos las palabras pronunciadas por su Presidente durante la celebración del centenario del Palacio de la Paz, cuando señaló:

“La Corte continuará trabajando fuertemente para enfrentar los retos que se presenten con el fin de resolver siempre las disputas que le sean sometidas de manera fiel e imparcial de acuerdo a la noble misión judicial que le fue confiada por la Carta de las Naciones Unidas”.

Costa Rica confirma su respeto absoluto a los instrumentos y organizaciones del derecho internacional, y su compromiso de respetar y acatar fielmente todas las decisiones que emanen de ellos, reiterando su plena confianza en que la Corte continuará fortaleciendo la paz y la justicia a través del ejercicio objetivo de sus tareas.

Sr. Belaid (Argelia) (*habla en inglés*): En primer lugar, me gustaría expresar nuestro agradecimiento al Presidente de la Corte Internacional de Justicia, Magistrado Peter Tomka, por el exhaustivo informe (véase A/69/PV.33) que presentó sobre las actividades de la Corte durante el año transcurrido (A/69/4).

Argelia hace suyas las declaraciones formuladas por el representante de la República Islámica del Irán, en nombre del Movimiento de Países No Alineados; y por el representante de Sudáfrica, en nombre del Grupo de los Estados de África (véase A/69/PV.33).

Mi delegación quisiera destacar el innegable papel que ha desempeñado la Corte Internacional de Justicia en el fomento de la paz y la seguridad internacionales, en particular mediante el cumplimiento de su mandato relativo a la solución pacífica de controversias de conformidad con las normas del derecho internacional y los principios de la justicia. De hecho, a pesar de que en los planos internacional y regional se han creado muchas jurisdicciones especializadas para hacer frente a los numerosos problemas que han ido surgiendo, la Corte Internacional de Justicia sigue siendo la única jurisdicción que goza de universalidad. La Corte tiene una posición única en la estructura jurídica internacional debido a que está consagrada en la Carta de las Naciones Unidas como el principal órgano judicial de la Organización. Debemos recordar que su Estatuto es parte integral de la Carta.

Con los años, la Corte ha ampliado de manera significativa la complejidad fáctica y jurídica de su labor. La Corte tiene el mandato de resolver las numerosas causas contenciosas que se originan en todo el mundo y abarcan una amplia gama de temas que incluyen controversias territoriales y marítimas, daños al medio ambiente, violaciones de la integridad territorial, violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y muchos otros. En ese sentido, mi delegación reitera su apoyo pleno a la función clave de la Corte como garante en la aplicación de las disposiciones del derecho internacional, en el dictamen de sentencias en las controversias entre los Estados, y en la emisión de opiniones consultivas a los Estados y las organizaciones internacionales sobre la mejor manera de cumplir con sus roles y funciones.

En ese contexto, deseamos hacer hincapié en la importancia de que todos los Estados, sin excepción, cumplan con sus obligaciones jurídicas y acaten los fallos de la Corte Internacional de Justicia en aquellas causas en las que sean partes. También es importante que, cuando sea necesario, las Naciones Unidas, en particular el Consejo de Seguridad y los organismos especializados, soliciten opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia. El elevado valor moral y jurídico de las opiniones consultivas de la Corte, sin duda, promoverá tanto la paz y la seguridad internacionales, como el estado de derecho.

La contribución positiva de la Corte Internacional de Justicia en la promoción y consolidación del estado de derecho en el plano internacional fue ampliamente reconocida y valorada por los Jefes de Estado y de Gobierno que participaron en la Reunión de alto nivel sobre el estado de derecho en los planos nacional e internacional, que se celebró en Nueva York el 24 de septiembre de 2012 (véase A/67/PV.3 y siguientes). Al cumplir, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, sus dos funciones principales, la Corte Internacional de Justicia ha contribuido, en los últimos seis decenios al desarrollo y codificación de las normas del derecho internacional, así como a la consolidación de los principios de justicia e igualdad en el plano internacional.

Por último, como se indica en el informe,

“El nivel sostenido de actividad por parte de la Corte ha sido posible gracias a un importante número de medidas adoptadas en los últimos años para mejorar su eficiencia y permitirle absorber el aumento constante del volumen de trabajo” (A/69/4, párr. 9).

En ese sentido, mi delegación encomia los esfuerzos realizados hasta ahora con ese fin y reafirma su confianza en la capacidad de la Corte para cumplir su misión con los mismos métodos meticulosos e imparciales y con un elevado nivel de eficacia.

Sr. Llorentty Solíz (Estado Plurinacional de Bolivia): El Estado Plurinacional de Bolivia agradece el informe de la Corte Internacional de Justicia correspondiente al período comprendido entre el 1 de agosto de 2013 y el 31 de julio de 2014 (A/69/4). Asimismo, agradece su presentación ante esta magna Asamblea, por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia, Magistrado Peter Tomka.

Bolivia, como Estado pacifista, se adhiere a la Carta de las Naciones Unidas y a los principios sobre

los que se establece la Corte Internacional de Justicia. Su jurisdicción, expresa una convocatoria permanente al diálogo entre naciones vecinas y hermanas. La Corte, sus principios y sus propósitos abren nuevas oportunidades de resolver nuestras deficiencias. El Estado Plurinacional de Bolivia, está convencido que la Corte Internacional de Justicia constituye uno de los mejores caminos para la solución pacífica de controversias entre Estados. Bolivia exhorta a que todos los Estados honren de buena fe su jurisdicción y sus decisiones, como alternativas de solución pacífica de conflictos, conforme a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

Bolivia asimismo solicita que se observe lo previsto en la resolución 67/1 mediante la cual los Estados Miembros de las Naciones Unidas reafirmaron su obligación de solucionar sus disputas por medios pacíficos, entre ellos el arreglo judicial. En ese mismo espíritu, la Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales prevé que el recurso al arreglo judicial no entraña un acto inamistoso entre Estados.

El derecho internacional es la base de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Por ello, Bolivia desea expresar una vez más la importancia del cumplimiento de sus determinaciones, tales como la opinión consultiva de la Corte de 9 de julio de 2004 titulada *Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado*. En ella, se llama a todos los Estados a respetar y garantizar el cumplimiento de las decisiones asumidas por la Corte.

Es igualmente importante destacar que la delegación boliviana respalda la necesidad de asignación de recursos presupuestarios suficientes para el funcionamiento de la Corte, además de que estos lleguen de manera oportuna. Es destacable el esfuerzo para divulgar el manual de la Corte traducido a los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas, que contribuye a la participación de todos los Estados.

Por último, Bolivia reafirma y ratifica su vocación pacifista para la resolución de conflictos y reitera su fiel apego a los principios del derecho internacional y lo dispuesto por la Carta de las Naciones Unidas.

Sra. Sealy Monteith (Jamaica) (*habla en inglés*): Mi delegación se suma a las condolencias expresadas al Gobierno y el pueblo de la República de Zambia por el fallecimiento del Presidente Michael Chilufya Sata.

Expreso mi agradecimiento al Presidente por dirigir la labor de la Asamblea General. También doy las gracias al Presidente de la Corte Internacional de Justicia,

el Magistrado Peter Tomka, por el informe (A/69/4) en el que se han basado nuestras deliberaciones de hoy.

Jamaica se adhiere a la declaración pronunciada por el representante de la República Islámica del Irán en nombre del Movimiento de los Países No Alineados (véase A/69/PV.33).

Jamaica se suma al resto de la comunidad internacional para subrayar la importancia de la Corte y su valioso papel en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y en el desarrollo, la promoción y la protección del estado de derecho. A lo largo de las décadas, la Corte ha sido fundamental a fin de resolver las controversias interestatales por medios pacíficos, evitando así en muchos casos situaciones que podrían haber desembocado en guerras. La creciente actividad de la Corte constituye en sí misma una prueba de la mayor voluntad de los Estados de recurrir al arreglo pacífico de las controversias y de su confianza en la Corte a la hora de ofrecer soluciones que en última instancia garantizan la paz internacional y el desarrollo sostenible.

En el informe actual se destaca el hecho de que la variedad de cuestiones presentadas ante la Corte se ha ido volviendo más compleja con el paso de los años. Se señala que tan sólo durante este ejercicio judicial la Corte ha oído cuestiones que iban desde la delimitación de fronteras y las controversias conexas hasta las violaciones de los derechos soberanos y el genocidio, la construcción de carreteras, la incautación y retención de determinados documentos y datos y la fumigación aérea con herbicidas. Asimismo, el informe señala que 70 Estados han hecho ya una declaración en la que reconocen la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia como obligatoria en virtud de lo establecido en el Artículo 36 de su Estatuto. Ello indica que los Estados Miembros confían cada vez más en que la Corte cumpla su mandato de manera independiente y sin dejar de aplicar las normas más estrictas conforme al derecho internacional.

No está de más subrayar el valor del trabajo de la Corte para la región del Caribe y de América Latina. Se observa que el presente informe destaca que 6 de las 13 causas vistas por la Corte en el último año estuvieron relacionadas con controversias territoriales en la región. Esto ilustra claramente la fe que deposita la región en la Corte como órgano judicial superior de las Naciones Unidas capaz de resolver controversias críticas entre los Estados.

El informe también apunta a la creciente complejidad fáctica y jurídica de los casos remitidos a la Corte y al elevado volumen de trabajo asumido durante el

ejercicio judicial 2013-2014. Se señala que durante ese período se emitieron fallos en 3 causas, se dictaron 13 órdenes, se celebraron audiencias públicas en 4 causas y la Corte se ocupó de 7 causas nuevas. El elevado volumen de trabajo realizado no sólo indica la importancia y la utilidad de ese augusto órgano, sino que también reafirma la eficiencia y la capacidad de la Corte a la hora de cumplir su mandato con imparcialidad e independencia.

Habida cuenta de la necesidad de mantener la eficacia de la Corte al tratar esa cantidad de casos, Jamaica apoya la opinión de que la Corte debe seguir dotándose de recursos adecuados para afrontar su mayor carga de trabajo.

Jamaica respeta los fallos y las decisiones de la Corte porque son fundamentales en el marco de su mandato de defensa y promoción del estado de derecho. La amplia publicación y disponibilidad de acceso de sus decisiones es sin duda encomiable puesto que contribuye a fortalecer y aclarar el estado de derecho. Los Estados pequeños como el nuestro agradecen que se facilite el acceso por diversos medios a la información sobre los avances jurídicos. Un buen ejemplo de ello es la publicación de los fallos de la Corte en su sitio web, que constituye un entorno fácil de utilizar al realizar búsquedas.

Jamaica aplaude los esfuerzos de sensibilización pública desplegados por la Corte durante el período objeto de examen. Concordamos plenamente con el Presidente en que, en el desempeño de sus funciones judiciales, la Corte ayudó a seguir promoviendo los objetivos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, entre los cuales no es de menor importancia el de la promoción del estado de derecho. Felicitamos a la Corte por su utilización de distintos soportes para dar a conocer sus trabajos, tales como su publicación anual, los medios impresos y electrónicos y el uso de servicios y recursos en línea para difundir la información entre el público en general. Jamaica cree que la educación y sensibilización del público son ingredientes esenciales para promover el estado de derecho e inspirar mayor confianza en la Corte.

Ahora que la Corte celebra su septuagésimo aniversario, resulta apropiado aumentar las actividades de información pública destinadas a resaltar el trabajo y la pertinencia de la Corte. Tomamos nota del calendario de actividades previstas y esperamos participar en dichos actos.

Para concluir, Jamaica reconoce que la importancia del trabajo de la Corte va más allá de los procesos y las funciones judiciales o de sus convincentes argumentos y conclusiones. Las decisiones y opiniones que

emite tienen efectos de gran alcance y consecuencias significativas para la vida cotidiana de los hombres y las mujeres comunes. En ese sentido, felicitamos a los magistrados y al personal de la Corte por la seriedad y la dedicación con las que abordan y examinan los casos que se les presentan. En nuestra opinión, este, el tribunal más alto en el plano internacional, debería seguir beneficiándose de la experiencia y las capacidades profesionales de quienes se mantienen a la vanguardia del derecho en todas sus expresiones y en todos los ordenamientos jurídicos y las regiones.

Jamaica reitera su fe en los principios que sustentan la labor de la Corte y reafirma su apoyo a la promoción de sus objetivos.

Sr. Haniff (Malasia) (*habla en inglés*): Ante todo, quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al Magistrado Peter Tomka, Presidente de la Corte Internacional de Justicia, por su presentación del informe de la Corte (A/69/4) para el período de 1 de agosto de 2013 a 31 de julio de 2014 (véase A/69/PV.33).

Malasia también desea sumarse a la declaración pronunciada por el representante de la República Islámica del Irán en nombre del Movimiento de los Países No Alineados (véase A/69/PV.33).

Malasia reconoce y encomia el importante papel desempeñado por la Corte Internacional de Justicia como órgano principal de las Naciones Unidas en el desarrollo del derecho internacional y su contribución al arreglo pacífico de las controversias internacionales y al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Mi delegación valora profundamente la adhesión de la Corte a sus mandatos establecidos y al respeto del estado de derecho. Consideramos que, sin duda, dicha adhesión contribuye a aumentar la confianza de los Estados Miembros y de los Estados no Miembros por igual en la eficacia de la Corte en el desempeño de su papel como órgano judicial principal de las Naciones Unidas.

También elogiamos los nobles esfuerzos realizados por la Corte para aumentar la concienciación y la comprensión públicas respecto de su importante labor en el arreglo judicial de las controversias internacionales, sus funciones de asesoramiento, la jurisprudencia y los métodos de trabajo, así como su papel en el seno de las Naciones Unidas, incluso mediante sus publicaciones y conferencias.

Malasia está comprometida con el arreglo de las controversias internacionales a través de medios pacíficos. Nuestro compromiso se pone claramente de

manifiesto en el hecho de que hemos resuelto de manera pacífica nuestras diferencias con nuestros vecinos a través de la Corte, a saber, en las causas *Soberanía sobre Pulau Ligitan y Pulau Sipadan (Indonesia/Malasia)* y *Soberanía sobre Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks y South Ledge (Malasia/Singapur)*. Aunque Malasia no descarta otros mecanismos de arreglo de controversias para una resolución satisfactoria de nuestras reivindicaciones, consideramos que la Corte ha proporcionado a la comunidad internacional una vía importante, independiente e imparcial para que los Estados Miembros busquen un recurso jurídico para sus controversias.

En relación con lo anterior, mi delegación considera que en cuestiones importantes relativas a controversias entre los Estados es necesario prestar atención a la importante función que puede desempeñar la Corte Internacional de Justicia. Para ser más concretos, Malasia alentaría a los órganos de las Naciones Unidas a que aprovecharan la emisión de opiniones consultivas de la Corte, como se establece en el párrafo 1 del Artículo 96. Consideramos que las deliberaciones sobre cuestiones políticas contenciosas serían más provechosas si se vieran complementadas con una opinión jurídica acreditada. Recordamos además que existe un precedente al respecto en una opinión consultiva de 1971, a saber, *Consecuencias jurídicas que tiene para los Estados la continuación de la presencia de Sudáfrica en Namibia (África Sudoccidental)*, no obstante lo dispuesto en la resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad.

Malasia también desea recordar que, mediante la resolución 49/75 K, aprobada el 15 de diciembre de 1994, la Asamblea General, de conformidad con el párrafo 1 del Artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas, solicitó que la Corte emitiera con urgencia su opinión consultiva sobre la pregunta “¿Autoriza el derecho internacional en alguna circunstancia la amenaza o el empleo de armas nucleares?” El 8 de julio de 1996, la Corte reconoció, por primera vez en la historia, que la amenaza o el empleo de armas nucleares es generalmente contraria a las normas del derecho internacional aplicables en los conflictos armados y en particular a los principios y normas del derecho humanitario. La Corte declaró además, de manera unánime, que

“Existe la obligación de emprender de buena fe y concluir negociaciones encaminadas al desarme nuclear en todos sus aspectos, bajo un estricto y eficaz control internacional.” (A/51/218, anexo, pág. 45)

Malasia considera que la opinión de la Corte Internacional de Justicia constituyó un importante hito en los

esfuerzos internacionales encaminados a lograr el desarme nuclear, al proporcionar un argumento moral para la eliminación total de esas armas devastadoras. Los pronunciamientos de la autoridad jurídica internacional más elevada son de importancia histórica y no pueden desestimarse. Con ese dictamen, la Corte estableció parámetros legales por los que al recurrir al empleo de armas nucleares se hace caso omiso del derecho internacional consuetudinario y de los tratados internacionales. Respecto de esa opinión consultiva, Malasia, desde 1996, ha presentado anualmente un proyecto de resolución titulado “Seguimiento de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de las armas nucleares”.

Este año, también conmemoramos el décimo aniversario de la opinión consultiva de la Corte emitida el 9 de julio de 2004, titulada *Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado*. Malasia fue uno de los patrocinadores de la resolución ES-10/14, aprobada el 8 diciembre de 2003, en la que se solicitó esa opinión. Nuestra delegación fue una de las 15 que formuló declaraciones orales en La Haya antes de se emitiera la opinión consultiva. En ese sentido, mi delegación desea reafirmar la conclusión de la Corte de que Israel no puede invocar un derecho de legítima defensa o un estado de necesidad a fin de excluir la ilicitud de la construcción del muro, y de que la Corte en consecuencia había determinado que la construcción del muro y su régimen conexo son contrarios al derecho internacional.

Para concluir, mi delegación recalca nuestro apoyo a la importante labor llevada a cabo por la Corte Internacional de Justicia en la promoción del arreglo pacífico de las controversias. Malasia cree firmemente en la función que desempeña la Corte y la defiende. Hemos llevado esta convicción a la práctica al resolver nuestras controversias territoriales a través de este mecanismo. La Corte es una parte integral del sistema multilateral internacional, y esperamos que todos los Estados Miembros sigan teniendo la más alta consideración y respeto por esa importante institución.

Sr. Tuy (Camboya) (*habla en inglés*): Ante todo, quisiera agradecer al Presidente Peter Tomka su liderazgo, así como su amplio informe sobre la labor de la Corte Internacional de Justicia (A/69/4) (véase A/69/PV.33).

Mi delegación desea recordar que, el 11 de noviembre de 2013, la Corte Internacional de Justicia anunció su fallo sobre la causa *Solicitud de interpretación del fallo de 15 de junio de 1962 en la causa relativa al Templo*

de *Preah Vihear (Camboya c. Tailandia) (Camboya c. Tailandia)* de la siguiente manera:

“La Corte,

Por unanimidad,

Determina que, en virtud del Artículo 60 del Estatuto, es competente para entender en la solicitud de interpretación del fallo de 1962 presentada por Camboya, y que esa solicitud es admisible;

Por unanimidad,

Declara, por vía de interpretación, que el fallo de 15 de junio de 1962 decidió que Camboya tiene soberanía sobre la totalidad del territorio del promontorio de Preah Vihear, según se define en el párrafo 98 del presente fallo, y que, en consecuencia, Tailandia está obligada a retirar de ese territorio las fuerzas militares o de policía u otros guardias o custodios tailandeses que allí estuvieran apostados”.

Quisiera hacer hincapié en que en el párrafo 98 del fallo se define claramente la ubicación del promontorio.

Este es un importante paso adelante en la significación histórica de los esfuerzos realizados por el Gobierno Real de Camboya con el fin de buscar una resolución pacífica basada en el derecho internacional para la controversia entre Camboya y Tailandia relativa al Templo de Preah Vihear y sus proximidades. En particular, destaco el hecho de que la Corte Internacional de Justicia utilizó la escala 1:200.000 en el mapa que figura en el anexo 1, que fue presentado por Camboya a la Corte en 1962, como prueba de interpretación de su fallo a fin de dar una orientación clara a las partes para su posterior aplicación.

Sobre esta base, en nombre del Gobierno Real de Camboya, quisiera reiterar y volver a recalcar la declaración que el 7 de noviembre de 2013 formuló el Primer Ministro del Reino de Camboya, Sr. Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, a todos los compatriotas camboyanos en relación con el compromiso de Camboya de cumplir la posición común alcanzada entre el Primer Ministro de Camboya y la ex Primera Ministra de Tailandia, Excm. Sra. Yingluck Shinawatra. En la declaración se señalaba que, independientemente del resultado del fallo de la Corte Internacional de Justicia de fecha 11 de noviembre de 2013, ambos países deben atenerse a la decisión y salvaguardar la amistad entre sus dos naciones y pueblos, así como preservar la paz y la estabilidad a largo de la frontera, a cualquier costo.

El Presidente ocupa la Presidencia.

Asimismo, quisiera reafirmar que el Real Gobierno de Camboya respetará y se atenderá a ese compromiso, conforme al espíritu de la reunión celebrada el 28 de octubre de 2013 en Poipet, en la provincia de Banteay Meanchey, por los Ministros de Relaciones Exteriores de ambas naciones, que acordaron en ella seguir deliberando en el marco de los mecanismos competentes existentes acerca de la ejecución del fallo de la Corte Internacional de Justicia. En ese sentido, los Gobiernos de ambos países se comprometieron a no hacer nada que cause tensiones y a impedir que las acciones que puedan causar tensiones entre ambos países. Del mismo modo, ambos Gobiernos se centrarán especialmente en mantener y fortalecer las relaciones amistosas y la buena cooperación entre los dos países, así como en evitar cualquier acto que pueda afectar al movimiento de personas a ambos lados de la frontera, a los intercambios comerciales, las inversiones, el transporte u otros ámbitos de cooperación.

Sr. Ney (Alemania) (*habla en inglés*): En nombre de Alemania, permítaseme ante todo dar las gracias al Presidente Tomka por su excelente presentación en el marco de la Semana del Derecho Internacional de este año. La Corte Internacional de Justicia es una institución imprescindible para el arreglo de las controversias internacionales por medios pacíficos y de conformidad con el derecho internacional. La Corte contribuye así de manera crucial al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. La existencia de la Corte y su éxito constituyen la antítesis misma de la idea de la ley del más fuerte.

Como ferviente promotora del estado de derecho internacional, Alemania ha sido una ardiente defensora de la Corte desde hace ya largo tiempo. Un ejemplo reciente de la importancia que concede Alemania a la Corte y a su labor es la Conferencia internacional sobre la Corte Internacional de Justicia organizada en enero por la Oficina Federal de Relaciones Exteriores de Alemania y los editores de *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary*. A la Conferencia acudieron el Presidente de la Corte, dos de sus magistrados, antiguos magistrados y expertos destacados en la Corte.

En la Conferencia se abordó un tema que quizá interese a mis colegas asesores jurídicos: el hecho de que la jurisdicción de la Corte esté basada en el consentimiento y limitada a través del mismo y el efecto que puede tener sobre la capacidad de la Corte de contribuir verdaderamente al arreglo sostenible de los conflictos subyacentes entre los Estados implicados. Evidentemente,

el consentimiento de las partes debe seguir constituyendo la base de la jurisdicción de la Corte. Sin embargo, ese requisito puede tener un inconveniente. En algunas ocasiones, la aceptación de la jurisdicción de la Corte puede derivarse únicamente de un instrumento internacional determinado relativo a un tema muy específico. En ese caso, la jurisdicción de la Corte se limitará a ese tema muy específico. Un consabido ejemplo de ello es la jurisdicción de la Corte derivada de la Convención contra el Genocidio: dicha jurisdicción se limita al tema del genocidio. De esa manera, los otros aspectos jurídicos internacionales del conflicto subyacentes en cualquier caso de presunto genocidio quedarán excluidos *a priori* de la jurisdicción de la Corte. El resultado puede ser, necesariamente, una cobertura un tanto desequilibrada del fundamento jurídico, lo cual podría a su vez poner en peligro las posibilidades de resolver el conflicto a través de la Corte.

Sin embargo existe una solución: la mejor forma de impedir que eso ocurra consiste en que el mayor número posible de Estados acepte la jurisdicción general de la Corte conforme a la cláusula facultativa contenida en el párrafo 2 del Artículo 36 de su Estatuto. Alemania formuló una declaración en ese sentido en 2008 y por lo tanto reconoce la jurisdicción de la Corte como obligatoria. Si siguiera aumentando el número de declaraciones de este tipo, la Corte podría seguir ampliando su función como facilitadora destacada del arreglo pacífico de controversias. Quisiera instar a mis colegas asesores jurídicos a plantear esa opción a sus respectivos Gobiernos en los casos en que dichos Gobiernos no hayan formulado aún una declaración en ese sentido.

Si todos queremos apoyar a la Corte en su labor, el respeto a sus fallos y la plena aplicación de sus decisiones son sumamente importantes. Nunca se deben invocar las disposiciones del derecho interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones internacionales o de las decisiones de la Corte.

El Presidente (*habla en inglés*): Hemos escuchado al último orador de la lista sobre el tema 70 del programa.

¿Puedo considerar que la Asamblea General decide tomar nota del informe de la Corte Internacional de Justicia?

Así queda acordado.

El Presidente (*habla en inglés*): ¿Puedo considerar que la Asamblea General desea concluir el examen del tema 70 del programa?

Así queda acordado.

Tema 73 del programa

Informe de la Corte Penal Internacional

Nota del Secretario General (A/69/321)

Informes del Secretario General (A/69/324 y A/69/372)

El Presidente (*habla en inglés*): Doy la bienvenida a la Asamblea General al Magistrado Sang-Hyun Song, Presidente de la Corte Penal Internacional, quien acude a presentar el informe (véase A/69/321) relativo a la labor de la Corte.

La Corte Penal Internacional fue creada como Corte internacional independiente a fin de colmar el vacío jurídico histórico relativo a los delitos graves tales como el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión. Habida cuenta de su mandato, el principio de universalidad sigue siendo fundamental para la Corte y debemos seguir intentando lograrlo. También debería esforzarse por garantizar que imparta justicia de manera justa y equilibrada, tanto en el derecho como en la práctica. Cuando eso ocurre su credibilidad se incrementa en tanto que institución imparcial y justa.

He observado que la Corte se está comunicando para fortalecer su cooperación con las Naciones Unidas y las organizaciones regionales. Esa comunicación debe continuar con miras a mejorar la función complementaria de la Corte. La Corte también debe apoyar la primacía de la jurisdicción nacional en ese sentido.

Tengo ahora el honor de dar la bienvenida a la sede de las Naciones Unidas al Presidente de la Corte Penal Internacional, Excmo. Sr. Sang-Hyun Song. Le doy la palabra.

Sr. Sang-Hyun Song (Corte Penal Internacional) (*habla en inglés*): Antes de comenzar mi presentación, quisiera sumarme en nombre de la Corte Penal Internacional a todos quienes esta mañana expresaron sus condolencias por el prematuro fallecimiento del Presidente de Zambia, Sr. Michael Chilufya Sata. Zambia fue uno de los primeros signatarios del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y nuestros corazones acompañan al pueblo de Zambia y a su familia y amigos en el dolor por su pérdida.

Hace 41 años, la Asamblea aprobó la resolución 3074 (XXVIII), en la que se reconoció la necesidad especial de adoptar medidas internacionales encaminadas a garantizar el enjuiciamiento y castigo de los culpables de crímenes de guerra y de los crímenes de lesa

humanidad. Durante el año transcurrido, la Corte Penal Internacional ha estado muy ocupada exactamente en ese tipo de acción internacional, y es para mí un honor presentar hoy ante la Asamblea el décimo informe anual de la Corte Penal Internacional (véase A/69/321) a las Naciones Unidas.

En los últimos 12 meses hemos alcanzado numerosos hitos. Ahora tenemos un primer fallo y condena finales, una declaración de culpabilidad en la causa *Germain Katanga*. El número de investigaciones ha aumentado de ocho a nueve, y hay un número sin precedentes de seis causas en la fase preliminar del procedimiento. La Corte Penal Internacional ha emitido el primer fallo definitivo, por el que se concede la admisibilidad de la impugnación de un Estado, lo que da el paso a procedimientos internos. La Corte ha incoado su primer procedimiento sobre las denuncias de que se había influido en los testigos. Ucrania se convirtió en el segundo Estado no Parte en presentar una declaración por la que acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Otros siete Estados Parte ratificaron las enmiendas al Estatuto de Roma sobre el crimen de agresión, y seis Estados Parte ratificaron las enmiendas que hacen del uso de las armas químicas en los conflictos no internacionales un crimen de guerra sancionable por la Corte Penal Internacional.

Permítaseme presentar un breve resumen de las situaciones en las que participa la Corte Penal Internacional.

La primera etapa en cualquier situación ante la Corte Penal Internacional es un examen preliminar de la Fiscalía, que determinará si se reúnen las condiciones jurídicas y fácticas para abrir una investigación. Eso no significa que la cuestión deba ir a la Corte Penal Internacional. Como los representantes saben, el Estatuto de Roma se basa en el principio de la complementariedad. Los tribunales nacionales, por lo tanto, tienen primacía jurisdiccional —la Corte Penal Internacional es un tribunal de última instancia. En efecto, durante la etapa del examen preliminar las autoridades nacionales mantienen la responsabilidad primordial a fin de asegurarse de que cualquier denuncia verosímil se aborde de forma genuina, lo que haría innecesaria una investigación de la Corte Penal Internacional. Eso forma parte integrante del sistema del Estatuto de Roma: alentar las actuaciones nacionales como consecuencia de la participación de la Corte Penal Internacional.

Durante el período sobre el que se informa, la Fiscalía inició exámenes preliminares en la República Centroafricana, Ucrania y el Iraq, y finalizó el de la

República de Corea, por haber llegado a la conclusión de que los requisitos para una investigación no se habían cumplido. En el Afganistán, la Fiscalía encontró un fundamento razonable para estimar que se habían cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Por consiguiente, amplió el examen para incluir cuestiones relativas a la admisibilidad. También prosiguió sus exámenes preliminares en Colombia, Guinea, Honduras y Nigeria, y sobre la situación de la flotilla de Gaza a raíz de la remisión hecha por la Unión de las Comoras.

En cuanto a la situación de la República Democrática del Congo, durante el último año se produjeron varios acontecimientos importantes. El Sr. Germain Katanga fue condenado a 12 años de prisión después de haber sido declarado culpable de crímenes de guerra y de un crimen de lesa humanidad en relación con el ataque contra la aldea de Bogoro, en la provincia de Ituri, que tuvo lugar el 24 de febrero de 2003. El veredicto y la sentencia pasaron a ser definitivos, ya que ambas partes retiraron sus apelaciones. Los procedimientos relativos a la reparación a las víctimas han comenzado. Trece cargos de crímenes de guerra y cinco cargos de crímenes de lesa humanidad se confirmaron contra el Sr. Bosco Ntaganda. Está previsto que su juicio comience en junio del próximo año. La Sala de Apelaciones tiene previsto dictar en los próximos meses sus fallos sobre las apelaciones finales en las causas *Lubanga* y *Ngudjolo*.

Con respecto a la situación en la República Centroafricana, los alegatos finales en el juicio del Sr. Jean-Pierre Bemba se prevén para el próximo mes. Sin embargo, el Sr. Bemba, junto con otras cuatro personas, también es sospechoso en otra causa distinta y conexa relativa a las denuncias de pruebas falsas, de influir en falsos testimonios y de corromper a testigos. Esos procedimientos relacionados con delitos contra la administración de justicia no tienen precedentes en la Corte Penal Internacional. Demuestran que la Corte toma muy en serio el problema de la influencia en relación con los testigos

A la luz de los recientes acontecimientos trágicos ocurridos en la República Centroafricana, y después de una nueva remisión por su Gobierno, la Fiscalía ha decidido abrir nuevas investigaciones en ese país. En cuanto a la situación en Uganda, Joseph Kony y los otros tres acusados siguen lamentablemente en libertad.

En cuanto a la situación en Darfur y el Sudán, la Sala de Primera Instancia IV emitió una orden de arresto contra el Sr. Abdallah Banda en vista de la información de que el Gobierno del Sudán no colaboraría para

facilitar la presencia del acusado en el juicio. También está previsto mantener nuevos intercambios en relación con la capacidad del acusado y su voluntad de comparecer ante la Corte. Se le imputan supuestos crímenes en relación con un ataque a las fuerzas de la Unión Africana en Haskanita para el mantenimiento de la paz. Los otros cuatro sospechosos de la situación en Darfur todavía siguen en libertad.

En cuanto a la situación de Kenya, el juicio del Sr. Ruto y el Sr. Sang sigue adelante. En la causa contra *Kenyatta*, están pendientes varias mociones presentadas por las partes en la Sala de Primera Instancia para examinar la situación en que se encuentra la causa en estos momentos. En la causa *Walter Barasa*, en relación con las acusaciones relativas a la influencia corruptiva de un testigo, la Corte Penal Internacional espera que las autoridades kenianas lo entreguen a la Corte.

En la situación en Libia, la Sala de Apelaciones mantuvo las decisiones relativas a la admisibilidad en la Sala de Cuestiones Preliminares I en las dos causas que la Corte tiene ante sí. En la causa contra *Saif Al-Islam Al-Qadhafi*, los magistrados llegaron a la conclusión de que Libia no había demostrado que su investigación interna cubriera la misma causa que la Corte tiene ante sí. Por consiguiente, Libia tiene el deber de proceder inmediatamente a la entrega del Sr. Al-Qadhafi. Por otra parte, la Sala de Apelaciones confirmó la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares según la cual la causa de la Corte Penal Internacional contra el Sr. Abdullah Al-Senussi era inadmisibile, puesto que estaba siendo sometida a investigaciones internas llevadas a cabo por las autoridades competentes libias. Libia desea realmente llevar a cabo —y puede hacerlo— las investigaciones sobre las mismas imputaciones que ya fueron remitidas a la Corte Penal Internacional. Estas decisiones son una adición importante a la jurisprudencia que ofrece en la práctica ejemplos concretos del principio de complementariedad entre la Corte Penal Internacional y las jurisdicciones nacionales.

En cuanto a la situación de Côte d'Ivoire, la Sala de Cuestiones Preliminares I confirmó cuatro cargos de crímenes de lesa humanidad contra el Sr. Laurent Gbagbo. La fecha prevista para el juicio se establecerá en breve. En cuanto a la causa contra *Simone Gbagbo*, la impugnación de la admisibilidad presentada por el Gobierno de Côte d'Ivoire está pendiente. El Sr. Charles Blé Goudé fue trasladado a la Corte Penal Internacional en marzo de este año, tras la reactivación de la orden de arresto. Una decisión sobre la confirmación de los cargos está pendiente.

Por último, en la situación de Malí, la investigación por parte de la Oficina de la Fiscal sigue adelante poniendo un énfasis en las tres regiones del norte.

Este mes celebramos el décimo aniversario del Acuerdo de relación entre la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas. Quisiera expresar el más profundo agradecimiento de la Corte Penal Internacional a las Naciones Unidas por todo el apoyo y la cooperación que hemos tenido por tanto tiempo. Compartimos los mismos valores básicos. Ambas organizaciones se basan en los ideales de la paz, la seguridad y el respeto por los derechos humanos, y la consecución de estos objetivos solo puede obtenerse a través del estado de derecho y la cooperación internacional. Así como la paz y la justicia van de la mano, las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional así deben hacerlo. Nuestra asociación es indispensable para disfrutar de una comunidad internacional fuerte y para la protección de los intereses de la humanidad en su totalidad.

Como Presidente de la Corte Penal Internacional, nutrir esta importante relación ha sido una de mis prioridades. Me enorgullece mucho la cooperación eficaz de la que gozamos hoy en día en una amplia gama de ámbitos, y esperamos explorar formas de seguir desarrollándola. Cuando los fundamentos principales de la sociedad amenazan con desmoronarse, a menudo vemos a las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional colaborar hombro con hombro, apoyándose mutuamente en cumplimiento de los mandatos. Agradecemos profundamente la asistencia que recibimos de las Naciones Unidas en el terreno sobre una base reembolsable. En base al amplio sistema del Estatuto de Roma las Naciones Unidas y sus organismos especializados contribuyen significativamente al fortalecimiento de la capacidad de los sistemas judiciales nacionales, lo que a su vez ayuda a las Estados a cooperar con eficacia con la Corte Penal Internacional.

Los vientos de la renovación soplan en la Corte Penal Internacional. Las instalaciones permanentes de la Corte Penal Internacional están asentándose entre las dunas del Mar del Norte. La Corte espera mudarse a su nuevo domicilio, construido con ese propósito, antes de finales de 2015. El próximo año, los cuatro magistrados restantes de la mismísima primera generación de 2003 abandonarán la Corte Penal Internacional. Creo que es muy sensato por parte de la Corte Penal Internacional que se rejuvenezca nuestro poder judicial con seis magistrados nuevos cada tres años. Esto garantiza un equilibrio de continuidad y energía fresca.

Actualmente, se están llevando a cabo muchas reformas en la Corte Penal Internacional. Con las enseñanzas ganadas de la primera ola de los procedimientos preliminares y judiciales, los magistrados están simplificando el proceso penal mediante innovaciones prácticas. La Fiscal ha introducido un nuevo plan estratégico, adaptando su enfoque a las investigaciones y a los procesamientos, a la luz de las experiencias de las primeras causas. El Secretario está revisando las estructuras de apoyo de la Corte para que sirvan de la manera más eficaz y eficiente posible a los procedimientos judiciales y para que se fortalezca la presencia de la Corte Penal Internacional sobre el terreno.

La Corte Penal Internacional es una institución que cambia constantemente, y así ha de ser si queremos responder con eficacia a los desafíos cambiantes con los que se enfrenta. No obstante, no podemos hacerlo solos. En última instancia, el Estatuto de Roma será tan eficaz como quieran los Estados. Los Estados tienen la llave para desplegar el pleno potencial de la Corte Penal Internacional. La Corte no dispone de poderes coercitivos por sí sola. Contamos con el apoyo de 122 Estados partes que se han comprometido en este sentido. Quisiera agradecer las contribuciones significativas que han realizado una serie de Estados no partes al ofrecernos una sumamente valiosa cooperación con la Corte Penal Internacional.

Como Presidente de la Corte me he dirigido a muchos Estados que aún no son parte en el Estatuto de Roma para alentarlos a sumarse. He conversado con dirigentes de gobierno, parlamentarios, profesionales del derecho y con representantes de la sociedad civil. He señalado a su atención las protecciones jurídicas y el efecto disuasorios que brinda el Estatuto de Roma. He subrayado el principio de la no retroactividad, que significa que sumarse a la Corte Penal Internacional es una póliza de seguro para un futuro que ofrezca mayor seguridad, y no un método para resolver viejas rencillas. He subrayado los numerosos controles y salvaguardias que se han incorporado en el marco jurídico de la Corte Penal Internacional y he recalcado cómo los valores del Estatuto de Roma reflejan la solidaridad y el compromiso con la paz, la seguridad y el derecho internacional.

Me complace que en los últimos años el sistema de la Corte Penal Internacional haya obtenido muchos miembros nuevos, y espero y creo que este proceso siga adelante. Solo mediante una consolidación constante del apoyo global al sistema del Estatuto de Roma, en última instancia, lograremos su objetivo de la universalidad, con el corolario de no ofrecer lugar para que los autores de crímenes internacionales se escondan.

En este contexto, es motivo de profunda preocupación que las solicitudes de arresto y entrega emitidas por la Corte Penal Internacional sigan sin respuesta respecto de 13 personas, algunas de ellas desde 2005. Nueve años en paradero desconocido son una afrenta a la justicia, una afrenta a las víctimas y una afrenta a la comunidad mundial, que quiere ver a estos sospechosos de los crímenes más atroces enfrentarse a las acusaciones dirigidas contra ellos. No obstante, los sospechosos no deberían pensar que han evadido la justicia. Hemos visto detener a fugitivos de las cortes internacionales tras períodos de tiempo mucho más largos.

Nada de esto trata de socavar la presunción de inocencia. Esta sigue siendo una piedra angular del procedimiento de la Corte Penal Internacional en todo momento, junto con la legalidad y el debido proceso. No obstante, la única manera de que los sospechosos se queden libres de acusaciones es haciendo frente a estas ante la Corte Penal Internacional, mediante procesos escrupulosamente justos ante un tribunal de justicia.

De la misma manera que la Corte Penal Internacional respeta los derechos de los sospechosos y los acusados, también trata de ofrecer justicia a las víctimas. De manera simultánea con los procedimientos de la Corte, el Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas ofrece una respuesta muy concreta a las necesidades urgentes de las numerosas víctimas de los crímenes que caen dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Los programas de asistencia física y psicológica del Fondo Fiduciario, así como el apoyo material, son implementados por asociados con base local y actualmente apoyan a más de 110.000 víctimas, sus familias y sus comunidades en Uganda y en la República Democrática del Congo.

El empoderamiento de las mujeres y las niñas es un requisito fundamental de cualquier proceso de justicia, reconciliación y consolidación de la paz. Más de 5.000 beneficiarios del Fondo Fiduciario son sobrevivientes de violencia sexual y por motivos de género. El siguiente es el testimonio de Salima, una víctima de violencia sexual en Kivu del Sur, en la República Democrática del Congo, y una beneficiaria de un proyecto respaldado por el Fondo Fiduciario. Dijo:

“No teníamos experiencia empresarial. Poco a poco, aprendí mediante la capacitación a gestionar negocios pequeños. Ahora, tengo dos lotes de tierra y tengo un esposo. Mi esposo tenía sus propios hijos y yo llegué con los míos, y todos hemos recibido formación. En una de mis tierras he construido una casa para mis hijos. Llevo a cabo

mi pequeño comercio y estoy contribuyendo al desarrollo de mi comunidad.”

El Fondo Fiduciario depende de donaciones, que quizás sean también necesarias para la reparación del Fondo cuando una persona condenada es indigente. Una vez más, doy las gracias a aquellos Estados que han apoyado de manera generosa al Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional para beneficio de las víctimas mediante contribuciones voluntarias. Hago un llamamiento para que otros consideren hacer lo mismo, en beneficio de las víctimas.

Esta va a ser mi última intervención ante la Asamblea General en nombre de la Corte Penal Internacional. Mi mandato como Magistrado y Presidente terminará en marzo. Ha sido un gran honor servir a la Corte Penal Internacional en su histórica fase formativa. Cuando los primeros 18 magistrados de la Corte Penal Internacional se reunieron en La Haya hace 11 años en los locales provisionales de la Corte Penal Internacional no sabíamos lo que iba a pasar con el futuro de la Corte. ¿Íbamos a ser capaces de convertirla de una corte sobre el papel a una institución judicial activa? ¿Iban los Estados llevar a la práctica el mandato de la Corte? ¿Iba a ser capaz la Corte Penal Internacional de marcar la diferencia y tener un impacto?

Mi firme convicción es que la respuesta a todas esas preguntas es un “sí” rotundo. Lo que solía ser una mera idea, ahora es una realidad. Ahora tenemos un órgano internacional permanente que puede escuchar las acusaciones de crímenes internacionales a gran escala e investigar y procesar dichos actos cuando no se puede hacer cumplir la justicia en los tribunales nacionales. La Corte Penal Internacional ha iniciado investigaciones en respuesta a cuatro situaciones remitidas por Estados, dos situaciones remitidas por el Consejo de Seguridad y una declaración que acepta la jurisdicción de un Estado no parte en ese momento. Nuestras causas han involucrado a cientos de miles de víctimas.

La creciente jurisprudencia de la Corte Penal Internacional del derecho criminal internacional emana de los logros históricos de los tribunales *ad hoc* y de los tribunales mixtos establecidos o apoyados por las Naciones Unidas. Hemos abierto terreno en cuestiones como el uso de los niños soldado y la violencia por motivos de género. La Corte Penal Internacional está respondiendo a los llamamientos de la humanidad por justicia, ayudando a cambiar el mundo para mejor. En vez de ser una excepción rara, la rendición de cuentas por crímenes internacionales se ha convertido en algo

que las comunidades, las víctimas y las sociedades de alrededor del mundo esperan y exigen, conforme a la determinación de la Asamblea General expresada hace cuatro decenios en su resolución 3074 (XXVIII), del 3 de diciembre de 1973.

Los autores de asesinatos en masa, deportaciones, ataques contra civiles y violación como arma de guerra ya no pueden contar con la impunidad. Hoy en día, la perspectiva de enjuiciamiento internacional contribuye a disuadir que se cometan los actos más mortíferos y más atroces imaginables.

Sin embargo, aún estamos lejos de acabar con la impunidad. Miles de millones de personas caen fuera de la cubierta protectora del Estatuto de Roma, y las atrocidades son rampantes en algunos lugares de nuestro planeta común. Mi sueño es ver a todo el mundo unido en un sólido sistema de justicia penal internacional que, sobre todo, nos ayude a impedir que se cometan los peores crímenes.

Sin el imperio de la ley, no puede haber justicia, no puede existir una paz duradera ni tampoco el respeto universal de los derechos humanos. Formulo un llamamiento a los 31 Estados signatarios y a otros Estados que no son partes en el Estatuto de Roma para que consideren con seriedad adherirse a la Corte. Brinden el regalo de la esperanza a los niños, hombres y mujeres del mañana.

El Presidente (*habla en inglés*): Tiene ahora la palabra el observador de la Unión Europea.

Sr. Marhic (Unión Europea): Tengo el honor de hablar en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros. La ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y Albania, países candidatos; Bosnia y Herzegovina, país del Proceso de Estabilización y Asociación y candidato potencial, así como Georgia, se adhieren a esta declaración.

Ante todo, agradecemos al Presidente Song su presencia en Nueva York y su amplia exposición informativa, y damos las gracias a la Corte Penal Internacional por su décimo informe anual presentado ante las Naciones Unidas (véase A/69/321), que abarca el período comprendido entre el 1 de agosto de 2013 y el 31 de julio de 2014 y en el que se detalla lo que se describe como otro año en el que siguió aumentando el volumen de trabajo de la Corte.

Somos firmes partidarios de la Corte Penal Internacional, y nuestra sólida política en este sentido tiene una base institucional firme en una decisión detallada

del Consejo Europeo que se aprobó en 2011 y en un plan de acción elaborado en 2011 sobre la aplicación que se ajusta a la creciente actividad de la Corte.

En el informe de este año observamos que, con 21 causas en 8 situaciones que se encuentran en distintas fases de los procedimientos y con otras 10 situaciones que están en los exámenes preliminares, la Corte afronta un volumen de trabajo cada vez mayor. La Fiscalía está investigando un número mayor de denuncias que en el período anterior objeto de examen. En ese sentido reconocemos la apertura de exámenes preliminares sobre denuncias de crímenes ocurridos en la República Centroafricana, el Iraq y Ucrania, así como la conclusión del examen preliminar de la situación en la República de Corea. Acogemos con beneplácito el primer veredicto definitivo de la Corte en la causa *Fiscalía c. Germain Katanga*, de junio de 2014.

La Corte ha dado esperanzas a las víctimas de los crímenes más graves. Durante el período sobre el que se informa se registraron más de 3.000 solicitudes de participación y 2.500 solicitudes de reparación. Acogemos con agrado el hecho de que 20 Estados han contribuido al Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional para las Víctimas. Alentamos a otros a hacer lo propio.

En el reciente informe de la Corte se describen los esfuerzos que la Corte ha realizado para cumplir su mandato. También se describen las dificultades que afronta la Corte.

Si bien ningún nuevo Estado ha ratificado el Estatuto de Roma o el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte durante el período sobre el que se informa, observamos que ocho Estados ratificaron las enmiendas sobre el crimen de agresión y nueve Estados ratificaron enmiendas sobre ciertos crímenes cometidos en conflictos armados no internacionales. Acogemos con satisfacción que Ucrania, Estado que no es parte en el Estatuto, aceptara la jurisdicción de la Corte a través de una declaración emitida el 17 de abril de 2014 sobre presuntos delitos cometidos en su territorio desde 21 noviembre 2013 hasta 22 febrero 2014.

El logro de la universalidad del Estatuto de Roma, que sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la Corte Penal Internacional, es esencial para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional. Los autores de dichos crímenes, independientemente de su condición, deben rendir cuentas por sus actos. Un elemento clave en el Estatuto de Roma es su aplicación

igualitaria a todas las personas sin distinción por el desempeño de funciones oficiales.

Tenemos que seguir esforzándonos sin descanso para que el Estatuto de Roma sea verdaderamente universal. Durante el período sobre el que se informa, continuamos participando en la promoción de la universalidad del Estatuto de Roma, en el aumento de la participación en el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional y en la promoción de una mejor comprensión del mandato de la Corte a través de gestiones diplomáticas y diálogo en terceros Estados y en organizaciones internacionales, como la Liga de los Estados Árabes y la Unión Africana, mediante la organización de seminarios regionales o locales, la inclusión sistemática de una cláusula de la Corte en acuerdos con terceros países y en el apoyo financiero a las organizaciones de la sociedad civil que ejercen presión para que se alcance la universalidad del Estatuto de Roma. Desde 2003, la Unión Europea ha proporcionado más de 30 millones de euros a las campañas mundiales en favor de la ratificación emprendidas por la sociedad civil y a proyectos de la Corte.

La responsabilidad principal de llevar a los delincuentes ante la justicia recae en los propios Estados, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estatuto de Roma. La complementariedad es un principio básico en el Estatuto de Roma. A fin de llevarlo a la práctica, todos los Estados partes tienen que preparar y aprobar una legislación nacional eficaz para aplicar el Estatuto de Roma en los sistemas nacionales. Actualmente estamos realizando gestiones a fin de identificar necesidades con miras a ayudar a los países a mejorar su capacidad institucional y jurídica para integrar el Estatuto de Roma en el nivel nacional.

Otro reto fundamental sigue siendo, a saber, la necesidad de garantizar la cooperación con la Corte Penal Internacional y, en particular, la forma de reaccionar ante casos de falta de cooperación de los Estados que incumplen sus obligaciones relacionadas con la Corte. Sin lugar a dudas, la cooperación con la Corte y la aplicación de sus decisiones son igualmente esenciales para que la Corte pueda cumplir su mandato. Eso se aplica a todos los Estados partes en el Estatuto de Roma y cuando el Consejo de Seguridad ha remitido una situación a la Corte de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

Observamos con preocupación que las órdenes de detención dictadas por la Corte siguen pendientes, algunas desde 2005. Recordamos que la falta de cooperación

con la Corte en lo que respecta a la ejecución de las órdenes de detención constituye una violación de las obligaciones internacionales y menoscaba la capacidad de la Corte para impartir justicia. Hacemos un llamamiento a todos los Estados para que adopten medidas coherentes a fin de estimular la cooperación plena y apropiada con la Corte, incluida la rápida ejecución de las órdenes de arresto. También reiteramos la importancia fundamental de que todos los Estados se abstengan de ayudar a refugiar o a ocultar a los autores de los delitos más graves y adopten las medidas necesarias para enjuiciar a los responsables con el objeto de poner fin a la impunidad. Otro desafío adicional sigue siendo que los procedimientos de la Corte deben ser justos y rápidos, al tiempo que se preservan los derechos de los acusados. Por lo tanto, apoyamos la labor de la Corte a fin de agilizar los procedimientos.

Acogemos con beneplácito las medidas adoptadas por los Estados, las organizaciones internacionales y la sociedad civil para incrementar la cooperación con la Corte Penal Internacional y la asistencia que se le presta. En particular, encomiamos la cooperación en curso de las Naciones Unidas con la Corte, a nivel de las sedes, las instituciones especializadas y las misiones sobre el terreno, lo cual se reconoce en el informe. Acogemos igualmente con beneplácito la reciente práctica de las Naciones Unidas de informar a la Fiscal y al Presidente de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma con antelación a cualquier reunión con las personas que estén sujetas a órdenes de arresto emitidas por la Corte que se consideran necesarias para el desempeño de las tareas que les han encomendado las Naciones Unidas, llevadas a cabo en cumplimiento de lo dispuesto en las directrices publicadas por el Secretario General en 2013.

La Unión Europea y sus Estados miembros se comprometen, por su parte, a proseguir sus esfuerzos en la lucha contra la impunidad, en particular otorgando a la Corte su pleno respaldo diplomático. Por primera vez este año, sobre la base del acuerdo entre la Corte Penal Internacional y la Unión Europea de 2006 en materia de cooperación y asistencia, se celebró una mesa redonda conjunta entre la Unión Europea y la Corte Penal Internacional para celebrar consultas y garantizar el intercambio periódico de asuntos de interés mutuo, incluida la cooperación, la complementariedad, la prestación de apoyo diplomático y la incorporación de una perspectiva de género, así como información pública y divulgación.

Nuestro objetivo común sigue siendo el mismo: continuar fortaleciendo la Corte para que cumpla su

mandato con eficacia. Hay Estados Partes en la Corte Penal Internacional en todas partes del mundo, y todos los Estados Partes comparten la titularidad del Estatuto. Seguiremos alentando la participación más amplia posible en el Estatuto de Roma y actualmente dedicamos nuestros esfuerzos a preservar la integridad del Estatuto, apoyando la independencia de la Corte y asegurando la cooperación con la Corte. También estamos comprometidos a aplicar plenamente el principio de la complementariedad consagrado en el Estatuto de Roma, facilitando la interacción efectiva y eficiente entre los sistemas nacionales de justicia y la Corte Penal Internacional en la lucha contra la impunidad.

Sr. Charles (Trinidad y Tabago) (*habla en inglés*): Tengo el honor de formular esta declaración en nombre de los 14 Estados miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM).

También aprovechamos esta oportunidad para rendir homenaje a la memoria del difunto Presidente de Zambia, Excmo. Sr. Michael Sata, no solo por su contribución al desarrollo de su país, sino también por su dedicación a la labor de la Corte Penal Internacional.

La CARICOM sigue desempeñando un papel fundamental en la defensa de los objetivos y principios sobre los que se fundó la Corte Penal Internacional. El 9 de abril, la CARICOM y los demás miembros de la comunidad internacional lamentaron la muerte del ex Primer Ministro y Presidente de Trinidad y Tabago, Excmo. Sr. Arthur Robinson, quien fue reconocido mundialmente por su labor pionera que dio lugar a la aprobación del Estatuto de Roma en 1998, por el que se estableció la Corte Penal Internacional. Como región, la CARICOM apoya firmemente el mandato de la Corte Penal Internacional y su objetivo fundamental de contribuir a poner fin a la impunidad de los autores de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, así como contribuir a la prevención de esos delitos.

No es exagerado afirmar que, a pesar de sus destructores y numerosos desafíos, no puede pasarse por alto que la Corte Penal Internacional sigue siendo un faro de esperanza para todas las víctimas de los delitos cometidos dentro de su jurisdicción que buscan justicia. Esas víctimas incluyen a miles de mujeres y niños, que son los más afectados por las actividades de los delincuentes que muestran un menosprecio flagrante por la inviolabilidad de la humanidad al infringir el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.

La Corte sigue creciendo. Cada vez más Estados Parte se adhieren al Estatuto de Roma. La CARICOM espera que, en un futuro próximo, la Corte Penal Internacional logre la universalidad.

También reconocemos la revitalización y el fortalecimiento de las relaciones entre la Corte y las Naciones Unidas. En ese sentido, agradecemos el informe del Secretario General sobre la información relativa a la aplicación del artículo 3 del Acuerdo de Relación entre las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional (A/68/364). Debido a la relación simbiótica que existe entre las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, la CARICOM celebra la colaboración conjunta de la Corte y esa importante institución. Sin embargo, al mismo tiempo, deseamos reiterar una vez más nuestro llamamiento a las Naciones Unidas para que se cubran los costos relacionados con las remisiones de las situaciones del Consejo de Seguridad a la Corte Penal Internacional. A nuestro juicio, eso sería coherente con las disposiciones pertinentes del Estatuto de Roma y el Acuerdo de Relación entre la Corte y las Naciones Unidas.

En los dos últimos años, la CARICOM ha sido testigo de los ingentes avances logrados por la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Sra. Bensouda, en cumplimiento de su mandato. En ese sentido, acogemos con beneplácito el lanzamiento por la Fiscal de la política de la Corte Penal Internacional en materia de violencia sexual y basada en el género, el primer documento de ese tipo jamás elaborado por una corte o un tribunal internacional. Al mismo tiempo, la CARICOM también encomia al Presidente de la Corte Penal Internacional, Magistrado Song, por su presentación del informe anual de la Corte Penal Internacional (A/69/321), y desea dejar constancia de su agradecimiento por su excelente labor en la conformación de la Corte Penal Internacional desde su primera elección en la Corte en 2003. Estimamos que, dado que el Magistrado Song dejará el cargo en marzo de 2015, podrá celebrar el hecho de que se marchará dejando atrás una Corte Penal Internacional que es mucho más sólida de lo que lo era cuando primero lo ocupó en 2003. Lo aplaudimos por ello.

Durante el último año también hemos observado la labor permanente de la Corte que consiste en enjuiciar a varias personas acusadas en numerosas situaciones que se han remitido a la institución. Lo que es más importante para nosotros en la CARICOM, la sentencia dictada el 7 de marzo en la que la Corte declaró al Sr. Germain Katanga culpable de cinco cargos, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y su posterior

condena en mayo, es un buen augurio para la justicia penal internacional.

En esta coyuntura, esperamos también que los Estados partes, cuando seleccionen magistrados durante las elecciones de diciembre en la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma, respeten escrupulosamente las disposiciones pertinentes del artículo 36 del Estatuto y elijan solo a personas que se ajusten de manera estricta a los criterios de competencia y experiencia prestablecidos para ser electos como magistrados de la Corte Penal Internacional. El no hacerlo podría llevar a que al estrado de la Corte asciendan individuos que no gozan de la confianza de la comunidad internacional.

En la CARICOM nos satisface que, en cada etapa del proceso judicial seguido en la causa *El Fiscal c. Germain Katanga*, la Corte Penal Internacional haya observado todos los principios relacionados con los procedimientos de un juicio imparcial. La CARICOM no solo encomia a la Corte por sentenciar al Sr. Katanga, sino también por su histórica decisión de indemnizar a las víctimas. Esa decisión, a nuestro juicio, tiene un alcance amplio, pues también establece los principios relacionados con la indemnización.

En la CARICOM tenemos la esperanza de que, en un futuro próximo, la Corte Penal Internacional esté en condiciones de iniciar el juicio de otros individuos que están acusados de cometer crímenes contemplados el artículo 5 del Estatuto de Roma. No obstante, si se desea alcanzar ese objetivo, las entidades pertinentes deben cumplir sus obligaciones jurídicamente vinculantes a fin de ejecutar las órdenes de detención emitidas por la Corte y detener y entregar a la Corte Penal Internacional a las personas que continúan evadiendo la justicia. Deseamos recordar a todos los interesados que incumplen esas obligaciones que están contribuyendo a una cultura de la impunidad, que no solo impide que se haga justicia, sino que también socava los cimientos del estado de derecho.

La cooperación con la Corte es una idea central en el Estatuto de Roma, y no es solo una responsabilidad de los Estados partes, sino también una responsabilidad de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, sobre todo en lo que respecta a las remisiones del Consejo de Seguridad. A quienes afirman que la Corte es un obstáculo para el logro de la paz y la seguridad duraderas debemos recordarles que, en consonancia con la doctrina de la complementariedad consagrada en el Estatuto de Roma, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional solo se invoca cuando los Estados no pueden o no quieren procesar a individuos acusados de cometer

los delitos más graves, delitos que conciernen a la comunidad mundial. En otras palabras, la CARICOM considera que ningún individuo debe temer a la Corte Penal Internacional, pues es un tribunal de última instancia. La CARICOM también se siente satisfecha de que en sus 16 años de operaciones, la Corte se haya mantenido firmemente fiel a ese principio cardinal.

También acogemos con beneplácito el creciente número de ratificaciones de las enmiendas de Kampala en el Estatuto de Roma, incluida la enmienda al crimen de agresión. Con ese fin, la CARICOM continúa instando a todos los Estados Partes en el Estatuto de Roma a ratificar las enmiendas para que la Asamblea de los Estados Partes pueda adoptar las medidas necesarias en 2017 a fin de que entren en vigor.

Ante el inminente cese de las operaciones de los tribunales penales *ad hoc*, la comunidad internacional debe aceptar plenamente a la Corte Penal Internacional como el único tribunal internacional permanente dedicada al enjuiciamiento de todas las personas, sin distinción de rango o estatus, que cometan crímenes internacionales que puedan socavar el estado de derecho y la estabilidad política y económica de los Estados. En ese sentido, también hago más las palabras del Fiscal de la Corte Penal Internacional, que, en un debate público del Consejo de Seguridad, señaló que la justicia desempeña un papel decisivo en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Por último, la CARICOM sigue comprometida con el fortalecimiento progresivo de la relación entre las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional como parte de nuestro apoyo general al mantenimiento de un régimen internacional basado en la observancia de los derechos humanos inalienables de las personas; el respeto a la integridad territorial de los Estados; y la necesidad de garantizar que se haga justicia a quienes claman por ayuda, impidiendo, a su vez, que los autores de los crímenes más graves que tienen trascendencia para la comunidad internacional gocen de impunidad.

Sr. Rönquist (Suecia) (*habla en inglés*): Tengo el honor de hablar en nombre de los cinco países nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y mi propio país, Suecia.

Permítaseme comenzar agradeciendo a la Corte Penal Internacional su informe anual a las Naciones Unidas (A/69/321). También deseo agradecer personalmente al Magistrado Song, Presidente de la Corte Penal Internacional, su exhaustiva exposición informativa sobre las principales cuestiones que se abordan en el informe.

Los países nórdicos desean expresar su sincero agradecimiento a la Corte por su importante contribución a la lucha contra la impunidad en todo el mundo. En el informe y la presentación del Presidente Song se hace evidente que el número de causas en la lista de la Corte ha seguido aumentando. Las actividades de la Corte tienen un alcance mundial, y durante el período sobre el que se informa, la Oficina del Fiscal inició los exámenes preliminares en la República Centroafricana, el Iraq y Ucrania, y concluyó su examen preliminar en la República de Corea. Durante el período del informe, el Tribunal dictó su primera sentencia firme, en la causa de *El Fiscal c. Germain Katanga*. Seis causas se encuentran en la etapa de preparación para el juicio o en etapa de juicio propiamente dicho, con 8.040 víctimas representadas. La Corte Penal Internacional firmó recientemente un acuerdo con Libia que autoriza el acceso y la presencia de personal de la Corte en ese país. Un acuerdo similar se está gestionando con Malí. Estos son logros importantes. La Corte se ha convertido en el agente internacional más importante en los esfuerzos para combatir la impunidad y hacer avanzar el derecho penal internacional.

La participación de las víctimas y el derecho a la indemnización son características únicas y esenciales del Estatuto de Roma. Los problemas de las víctimas son esenciales para los países nórdicos, sobre todo los problemas de quienes han sido objeto de delitos sexuales y motivados por el género, así como los de otras personas vulnerables. Encomiamos la importante labor desplegada por el Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional para las víctimas, que ha apoyado a más de 110.000 víctimas de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte. El año pasado, los países nórdicos aportaron un total de 5,8 millones de euros al Fondo, y este año han hecho nuevas y sustanciales contribuciones. Seguimos recomendando a los Estados y a otros agentes que contribuyan al Fondo Fiduciario, lo que permitirá a las víctimas materializar sus derechos a la indemnización. En ese sentido, los países nórdicos están convencidos de que la realización plena de los derechos de las víctimas es un aspecto importante para la Corte siga siendo teniendo éxito y relevancia.

El principio de complementariedad, consagrado en el Estatuto de Roma, significa que la Corte Penal Internacional complementa a las jurisdicciones penales nacionales. Idealmente, no debería atender ninguna causa. Sin embargo, debemos reconocer que muchos Estados carecen de los recursos y la capacidad necesarios para llevar a cabo procedimientos penales en relación con

crímenes tan complejos y múltiples como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Los países nórdicos destacan el valor de la creación de capacidad entre los Estados partes y subrayan que estos pueden beneficiarse también del conocimiento y la experiencia de la Corte. Un ejemplo concreto de nuestras iniciativas de complementariedad es el mecanismo judicial de respuesta rápida, que es un mecanismo que ofrece profesionales en materia de justicia penal que pueden desplegarse rápidamente y que están capacitados para llevar a cabo investigaciones internacionales a fin de prestar apoyo a los Estados y las organizaciones.

Los países nórdicos desean señalar que el éxito de la Corte depende de sus magistrados y su personal altamente cualificados. La próxima elección de magistrados en la Asamblea de los Estados Partes, en diciembre de 2014, será una importante oportunidad para que los Estados partes se aseguren de que la Corte pueda contar con los magistrados más cualificados, competentes y con mayor experiencia. La Corte necesita magistrados con experiencia en las salas de audiencia, los conocimientos técnicos necesarios para abordar causas penales complejas y experiencia en derecho penal internacional y nacional, así como en derecho internacional humanitario y en las normas internacionales de derechos humanos. Otro tema importante para la próxima Asamblea de los Estados Partes será el debate del presupuesto anual. Si bien la Corte y la Oficina del Fiscal administran su volumen de trabajo de manera encomiable dentro del marco de su presupuesto actual, es evidente que el número cada vez mayor de situaciones y causas requiere un aumento en los recursos disponibles para ellas. Como Estados partes, tenemos la responsabilidad común de procurar que la Corte y la Oficina del Fiscal cuenten con el personal y otros recursos necesarios para cumplir su mandato. De la misma manera, los recursos del Fondo Fiduciario para las Víctimas previstos para el presupuesto de la Corte deben ser suficientes para cumplir su importante mandato.

Pese al éxito de la Corte Penal Internacional, el elevado número de órdenes de detención pendientes resulta preocupante. Hay que hacer avances en ese sentido. La cooperación de los Estados con la Corte, incluida la Oficina del Fiscal, debe mejorar. Con arreglo al Estatuto de Roma, los Estados partes tienen la obligación jurídica de cooperar plenamente con la Corte. Por lo tanto, instamos a que todos los Estados partes redoblen sus esfuerzos para cumplir las órdenes provisionales de la Corte, incluso evitando los contactos no esenciales y absteniéndose de invitar o recibir a sospechosos contra los que se haya dictado una orden de detención. Señalamos también a

la atención la constante necesidad de celebrar nuevos acuerdos entre la Corte y los Estados partes en relación con la reubicación y protección de testigos.

Todos los Estados deben también cumplir plenamente sus obligaciones con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas y la resolución 1593 (2005) del Consejo de Seguridad relativa a la situación de Darfur. El Gobierno del Sudán y las otras partes en el conflicto de Darfur deben cooperar plenamente con la Corte y La Fiscalía.

Los países nórdicos destacan la necesidad de aplicar de manera coordinada y coherente las políticas de las organizaciones internacionales con los Estados sobre el contacto con personas contra las que la Corte Penal Internacional ha dictado órdenes de detención o citación. Al incorporar nuestra política relativa a la Corte Penal Internacional en la diplomacia bilateral regular, aumentamos el alcance y la pertinencia de la Corte.

La independencia de la Corte no entraña su aislamiento. Nos sentimos alentados por la detallada descripción que figura en el informe sobre la considerable comunicación e interacción entre las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. Sin embargo, el Consejo de Seguridad necesita intensificar su apoyo a la Corte en los casos de falta de cooperación con la misma, ya que ello fortalece el seguimiento de las causas que le remite el Consejo. Al tiempo que respeta la independencia y la integridad de la Corte, el Consejo debe desempeñar el papel que le corresponde a fin de garantizar la rendición de cuentas cuando se han cometido graves violaciones del derecho internacional humanitario y las normas internacionales de derechos humanos en cualquier parte del mundo como, por ejemplo, en Siria.

La adhesión universal al Estatuto de Roma y su aplicación sigue en curso y debe intensificarse. Destacamos también la necesidad de que todos los Estados partes y los Estados que no son partes que aún no lo han hecho, ratifiquen y respeten plenamente y de manera prioritaria el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional.

Hay que reconocer que las actividades de la Corte Penal Internacional se extienden en todo el mundo. En ese sentido, la Oficina del Fiscal recibe comunicaciones y lleva a cabo exámenes preliminares relacionados con determinados países en distintas partes del mundo. A ese respecto, los países nórdicos acogen con satisfacción la intención de la Corte de intensificar su presencia sobre el terreno. La Corte Penal Internacional debe ser una institución visible y accesible para las personas sobre el terreno. Es importante también que la Corte se

conozca mejor en todo el mundo, sobre todo en los países cuya situación es objeto de examen. Los debates públicos sobre la Corte Penal Internacional, por ejemplo, han sido útiles para difundir información e intercambiar opiniones. La Corte debe también contar con recursos suficientes para una difusión efectiva de la información.

Las víctimas de los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, donde sea que se cometan, merecen justicia. La Corte Penal Internacional se creó para abordar los casos de que los Estados no podían o no querían hacerse cargo. Sin embargo, en la realidad actual, una Corte eficaz e independiente depende de la integridad del Estatuto de Roma y de la cooperación eficaz y amplia de los Estados. Solo entonces la comunidad internacional y la Corte podrán tratar de cumplir el objetivo de poner fin a la impunidad por delitos del pasado y prevenir esos delitos en el futuro.

La Corte y los Estados partes integran el sistema del Estatuto de Roma relativo a la justicia penal internacional, sobre la base de los principios de complementariedad, cooperación y responsabilidad compartida, a fin de que los autores rindan cuentas de sus crímenes masivos. A ese respecto, la independencia y la firmeza de la Oficina de Fiscal son esenciales. Apoyamos los esfuerzos de la Oficina para utilizar los exámenes preliminares como un instrumento para lograr la complementariedad, ya que esos exámenes ofrecen una oportunidad para el diálogo con las autoridades nacionales y pueden alentar la realización de exámenes nacionales e identificar posibilidades para apoyar a las autoridades nacionales en su labor. El trabajo relacionado con Guinea y Colombia es uno de esos ejemplos positivos.

Los países nórdicos acogen con satisfacción la aspiración de la Fiscalía de aumentar la eficiencia de la Corte. Acogemos con especial beneplácito la participación de la Corte en esferas importantes como los delitos sexuales y basados en el género, el enjuiciamiento de delitos contra los niños y la utilización de nuevas formas de pruebas además de los testigos.

Para concluir, deseo renovar nuestra promesa de que los países nórdicos seguirán siendo los principales partidarios de la Corte Penal Internacional. Estamos empeñados en seguir trabajando en favor de la eficacia, el profesionalismo, la independencia y la integridad de la Corte.

Sr. Hahn Choonghee (República de Corea) (*habla en inglés*): Ante todo, la República de Corea desea expresar su sincero reconocimiento al Presidente de la Corte Penal Internacional, Magistrado Sang-Hyun Song, por su liderazgo y su completo informe relativo a las actividades actuales de la Corte (A/69/321).

El año próximo, el Presidente Song concluirá su mandato como Presidente de la Corte, cargo que asumió en 2009, y el de magistrado de las Salas, que asumió en 2003. Ha desempeñado un papel esencial en la conducción de la Corte hacia un futuro más brillante y es un dedicado magistrado de la Corte Penal Internacional y un Presidente de la Corte que tiene pasión por la labor que realiza. Ha desempeñado un papel importante en la historia de la Corte Penal Internacional. El Presidente Song será recordado como uno de los promotores del desarrollo de la nueva corte permanente de justicia penal internacional, que apoyó el estado de derecho y la lucha contra la impunidad a fin de fomentar la justicia mundial. Como coreanos, nos sentimos especialmente orgullosos de la destacada contribución y el logro notable del Presidente Song como Presidente y magistrado de la Corte durante un período tan prolongado y le damos las gracias por ello.

Mi delegación encomia también los esfuerzos conjuntos de las Salas, la Fiscalía y la Secretaría de la Corte, que han sentado bases sólidas para el funcionamiento eficaz de la Corte. Hasta el momento, la Corte ha alcanzado notables logros al ocuparse de ocho situaciones. En este último año, la Fiscalía se ha centrado en el cumplimiento de sus funciones pese al creciente volumen de trabajo. En particular, acogemos con satisfacción los progresos realizados en la causa del Sr. Laurent Gbagbo relativa a la situación en Côte d'Ivoire, que ha sido objeto de examen en la Sala de Cuestiones Preliminares I para la confirmación de los cargos.

También observamos que, en este último año, el número de causas de las Salas y el volumen de trabajo de la Fiscalía han aumentado considerablemente. La Corte Penal Internacional ha completado su fallo definitivo y su sentencia condenatoria en la causa de *Germain Katanga*, quien fue sentenciado a 12 años de encarcelamiento en relación con la situación en la República Democrática del Congo.

Hay también muchas causas en etapa de juicio, como el juicio del Sr. Jean-Pierre Bemba Gombo relacionado con la situación en la República Centrafricana. La Sala de Apelaciones ha cumplido activamente su función esencial de supervisión judicial en relación con diversas causas, como la causa del Sr. Lubanga Dyilo y del Sr. Ngudjolo Chui. La Sala dictó también un fallo para mantener las decisiones contrastantes de la Sala de Cuestiones Preliminares relativas a las impugnaciones de la admisibilidad de Libia en dos causas. Ello se debe a una interpretación precisa del principio de complementariedad y de los artículos conexos del Estatuto de Roma.

Sin embargo, pese a los logros notables de la Corte, queda aún mucho por hacer para que esta cumpla su mandato. La Corte Penal Internacional no puede cumplir por sí sola esos objetivos. De hecho, es esencial también intensificar las actuales iniciativas de la comunidad internacional en favor de la justicia, el estado de derecho y la paz sostenible. Sobre la base del acuerdo existente entre las Naciones Unidas y la Corte, destacamos que es indispensable que ambas entidades fortalezcan aun más su relación.

Además, es fundamental que la Corte recabe un amplio apoyo y cooperación de todos los Estados Miembros. Sin su plena cooperación, la Corte no puede ejecutar las órdenes de detención pendientes contra los autores de delitos graves, ni realizar investigaciones completas a fin de que los juicios se desarrollen de modo adecuado. La Corte Penal Internacional se creó para que encarnara los principios rectores del Estatuto de Roma: poner fin a la impunidad y contribuir a la prevención de crímenes graves, entre otros, el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Con el objeto de que pueda cumplir plenamente su mandato, todos los interesados y los Estados partes en el Estatuto de Roma deben respetar a la Corte como institución judicial no política e independiente. Al hacerlo, podemos esperar que la Corte se siga centrando en la rendición de cuentas en la esfera penal de los autores de los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional y lleve a cabo de esa manera una contribución positiva a fin de echar cimientos sólidos en favor de la paz mundial sostenible en el futuro.

Para concluir, la República de Corea seguirá siendo siempre uno de los más firmes partidarios del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional y seguirá trabajando de manera incesante para cumplir ese objetivo común de la comunidad internacional.

Sr. Elías-Fatíle (Nigeria) (*habla en inglés*): Damos las gracias al Presidente de la Corte Penal Internacional, Magistrado Song, por su informe (A/69/321), que hoy estamos examinando. Lo encomiamos por su dirección de la Corte a lo largo de los últimos años y le deseamos éxito en las actividades que emprenda después de completar su mandato, el año próximo, al frente de la Corte Penal Internacional. Aprovechamos también esta oportunidad para expresar nuestro reconocimiento a la Presidenta de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Embajadora Tiina Intelmann, por su labor en la coordinación de los asuntos de la Asamblea durante su mandato, que vence en diciembre de 2014. De la misma manera, felicitamos al Presidente electo, Sr. Sidiki Kaba, Ministro de Justicia

del Senegal, y esperamos con interés su respaldo en el 13º período de sesiones de la Asamblea, en diciembre.

Mi delegación acoge con satisfacción los progresos apreciables realizados por la Corte Penal Internacional en la lucha contra la impunidad y los crímenes de lesa humanidad. Nigeria encomia al Tribunal por sus importantes contribuciones a la elaboración del derecho penal internacional sustantivo y procesal, así como a la promoción del estado de derecho. Mediante su labor, se ha fortalecido la necesidad de rendir cuentas por los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

El objetivo de la Corte Penal Internacional se basa en el concepto de que es necesario hacer frente a la impunidad y de que todos deben rendir cuentas de sus actos. Por lo tanto, la cooperación de los Estados, las organizaciones internacionales y la sociedad civil es esencial para que la Corte siga cumpliendo su función tal como se prevé en el Estatuto de Roma. En este sentido, felicitamos al Presidente de Kenya, Excmo. Sr. Uhuru Kenyatta, quien, corriendo un gran riesgo personal, acudió a La Haya el 8 de octubre en calidad de ciudadano en respuesta a una invitación de la Corte. Consideramos que ese es el nivel más alto de cooperación que cualquier persona o Estado puede otorgar a la Corte, y que también demuestra un compromiso con el estado de derecho y el respeto del mismo.

Sin embargo, nos preocupa que la Corte Penal Internacional no haya desestimado la causa contra el Presidente Kenyatta a pesar de que no pudo justificar los motivos de la denuncia en su contra. Por lo tanto, pedimos a la Corte que muestre más respeto hacia los dirigentes africanos y que entable un diálogo con la Unión Africana y los Estados africanos sobre la base del respeto mutuo, ya que todos compartimos los mismos valores: la promoción del estado de derecho y la lucha contra la impunidad por los delitos más graves. Debe tenerse en cuenta que, de los 122 países que son Estados partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 34 son Estados africanos. Por lo tanto, África es el continente con el mayor número de miembros. De hecho, este número significativo no debería ser alienado.

Como signataria del Estatuto de Roma, Nigeria se ha comprometido de buena fe con los ideales de la Corte Penal Internacional. Nuestra posición sobre los derechos humanos, el estado de derecho, la paz y la seguridad, la democracia, la buena gobernanza y la rendición de cuentas se atiene a los principios para cuya promoción se estableció la Corte Penal Internacional. Hemos estado demostrando nuestro firme compromiso

con la promoción de estos valores de distintas maneras. Nigeria es miembro de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma, que ratificamos el 27 de septiembre de 2001. Estamos comprometidos con la Corte Penal Internacional y con los valores fundamentales del Estatuto. Apoyamos los principios rectores y los objetivos de la Corte Penal Internacional, y hemos subrayado constantemente la importancia estructural de la Corte Penal Internacional en la lucha contra la impunidad y en la búsqueda de la rendición de cuentas judiciales.

Consideramos que la impunidad siempre que ocurra en el mundo debe abordarse de manera decidida, y hemos institucionalizado distintos instrumentos para afrontarla a nivel nacional. Creemos que la aspiración de un sistema mundial basado en el estado de derecho, en el que la rendición de cuentas y la justicia social sean los cimientos de una paz duradera, debe convertirse en una fuente de inspiración para todos. De hecho, debería ser una prioridad para la comunidad internacional, para los dirigentes del mundo y para todos los ciudadanos por igual.

Sr. Kamau (Kenya) (*habla en inglés*): El informe que tenemos hoy ante nosotros (A/69/321) es el décimo que hemos recibido de la Corte Penal Internacional, y por él le damos las gracias al Secretario General. También quisiera aprovechar esta oportunidad para reconocer la labor del Presidente de la Corte Penal Internacional, Magistrado Sang-Hyun Song. El Magistrado Song sin duda alguna ha presidido la Corte durante uno de los períodos más difíciles y complejos. Durante su mandato, la Corte Penal Internacional ha crecido tanto en prestigio como en alcance. Dado que esta será su última comparecencia ante la Asamblea General como Presidente de la Corte, en nombre de la República de Kenya quisiera desearle lo mejor en sus futuras labores.

A lo largo de los años, hemos seguido alentando a la Corte a que amplíe sus actividades, potencie su labor, mejore su eficiencia y siga trabajando para los Estados Miembros y, lo que es aún más importante, para las víctimas de crímenes dentro del ámbito de su jurisdicción. Creamos la Corte porque pensamos que la comunidad internacional —es decir todos los países, ricos y pobres por igual— necesitaban una plataforma común para ejercer la jurisprudencia internacional. Como declaró recientemente el Presidente Uhuru Kenyatta en su intervención ante una sesión conjunta del Senado y la Asamblea Nacional:

“Dada nuestra experiencia con la Corte, no obstante, muchos nos han preguntado por qué actuamos con tal entusiasmo [por unirnos a la Corte]. Fue porque pensábamos entonces, al igual que

ahora, que en un mundo desigual, solo una serie de normas comunes que rijan la conducta internacional podrían poner coto a la anarquía.”

La Corte se creó para garantizar que ningún país tuviera una relación de privilegio dentro de ella y que ningún individuo disfrutara de privilegios especiales ante ella. Como cualquier institución joven en sus primeros años, hemos seguido participando, alentando y ofreciendo guía a la Corte para intentar instruirla a fin de que siga manteniéndose fiel a nuestros objetivos, alineándose con el Estatuto de Roma, y centrándose en lo que creíamos era el tipo de futuro que deseábamos ver en el contexto de la labor de la jurisprudencia internacional. Al examinar el informe de la Corte Penal Internacional que tenemos ante nosotros hoy, no podemos evitar sentir una gran decepción y un cierto desengaño por la institución de la que teníamos tan grandes expectativas y aspiraciones.

La conclusión a la que se llega en este informe nos relata una historia triste y descorazonadora de pocas ambiciones, mala ejecución y poco éxito. La Corte indica en su conclusión que:

“las actividades de la Corte Penal Internacional siguen aumentando; por primera vez ha quedado firme un fallo, y un número sin precedentes de víctimas, 8.040, estuvieron representadas en seis causas, en la etapa de preparación de juicio o en la etapa de juicio propiamente dicha” (A/69/321, párr. 98).

En un mundo que ha sido consumido por guerras regionales y enfrentamientos violentos y desmesuradamente devastadores, y donde cientos de miles —sino millones— de personas en los últimos 10 años han muerto, parece extraordinario que la Corte Penal Internacional solo haya emitido un fallo durante sus años de existencia y haya dejado una huella de solo 8.040 víctimas. La Corte Penal Internacional incluye en su informe una relación más bien débil y deficiente de sí misma ante los Estados Miembros. Para nosotros esto es simplemente confuso. También es realmente deprimente imaginar que la Corte comparezca ante los Estados Miembros y declare en su informe más reciente que acaba de finalizar un fallo y ha representado solo a 8.040 víctimas.

Está claro que algo no marcha bien. Por consiguiente, no nos sorprende que la conclusión a la que se llega en ese mismo informe también indique que por primera vez no ha habido ningún nuevo Estado que haya ratificado el Estatuto de Roma durante el último período sobre el que se informa. Claramente, la Corte, que sigue contando con la membresía de un segmento de países del mundo, está

teniendo dificultades a la hora de convencer a nuevos países que no son signatarios a que se sumen a la Corte y fortalezcan con ello su reputación y trabajo internacionales.

Para aquellos de nosotros que hemos trabajado íntimamente con la Corte en los últimos años, está claro que hay que hacer algo radical y urgente si queremos que la Corte tenga alguna posibilidad de sobrevivir a largo plazo como una institución internacional viable y creíble. Kenya sigue profundamente preocupada por la interpretación y la aplicación actuales del Estatuto de Roma, y para nosotros ello bien puede ser un peligro para la Corte. Aunque la Corte Penal Internacional se esfuerza por llevar a cabo su mandato y sigue recibiendo la sincera cooperación de los Estados partes, podría parecer que en el estado actual de interpretación y aplicación, los ideales del Estatuto de Roma —a saber, el enjuiciamiento por crímenes graves, la lucha contra la impunidad, la curación de las heridas nacionales, la reconciliación y las indemnizaciones a las víctimas— pudieran de hecho alcanzarse. Una simple lectura superficial del informe anual nos podría llevar incluso a pensar que efectivamente el éxito está al alcance. No obstante, nuestra delegación considera que la interpretación y aplicación actuales del Estatuto de Roma son contraproducentes y van en contra de los ideales contenidos en el Estatuto de Roma.

Kenya, como un país donde existen situaciones, sigue siendo penosamente consciente de la manera en que funciona la Corte Penal Internacional y la interpretación que da al Estatuto de Roma. Tras seis años como país donde existen situaciones y todo un ciclo posterior de elecciones, empezamos a reconocer que la manera en que la Corte Penal Internacional y la Oficina del Fiscal funcionan puede trastornar gravemente e incluso ir en detrimento del proceso político y social, de la recuperación y la promoción de la paz y la seguridad. La población de Kenya desea profundamente continuar con las cuestiones de reconciliación social y desarrollo.

Por lo tanto, es sumamente lamentable que la Corte Penal Internacional siga siendo una dificultad y un obstáculo para que el pueblo de Kenya alcance esas aspiraciones. Sin duda, esta no es la razón por la que creamos la Corte Penal Internacional. Nuestro constante silencio y aceptación del *statu quo*, por lo tanto, solo menoscabará la legitimidad de la Corte y su mandato fundamental, incluida la lucha contra la impunidad. Perjudica también considerablemente a las víctimas en cuyo nombre sigue perpetuándose el procedimiento y viola los derechos de los acusados protegidos por el Estatuto de Roma.

Una de las primeras cosas que debe hacer la Corte para corregir su forma de actuar es liberarse del

pernicioso grupo de países que han secuestrado su mandato operacional y han creado una institución distorsionada que representa actualmente los valores morales, éticos y, lo que es más perturbador, políticos de un grupo de países. En nuestra opinión, el programa de ese grupo de países representa una conducta vergonzosa, desestabilizadora e implacable. Esto se observa en los grupos de trabajo de la Asamblea de los Estados Partes aquí en Nueva York y en La Haya. Se observa también en las prácticas de contratación y operacionales de la Corte. Se observa en su conducta judicial y de enjuiciamiento, e incluso en la manipulación insidiosa por ese grupo de terceras partes, sobre todo las organizaciones de la sociedad civil, que actúan como interlocutores de la Corte.

Son bien conocidos el poder y la riqueza que han permitido a ese grupo de países reivindicar las altas esferas de la acción internacional. Sin embargo, lo que también es bien conocido es el origen de esa riqueza, en su mayor parte surgida de las aventuras imperialistas y coloniales, los paraísos fiscales y financieros y una férrea titularidad sobre la propiedad intelectual que niega a otros países la tecnología que necesitan para su propio desarrollo. De hecho, esa camarilla de países ejerce ese tipo de titularidad del derecho de propiedad en la Corte Penal Internacional. Esos países piensan de esa manera porque financian una cantidad desproporcionada del presupuesto destinado a las operaciones y, podría añadirse, las digresiones de la Corte Penal Internacional y, por lo tanto, creen tener el derecho inherente de reclamar una relación especial con la Corte, incluido el personal, el fiscal y los magistrados. Sin embargo, lo que decimos es que el dinero, como la fuerza, no significa lo correcto.

Me he apartado del tema, pero lo he hecho para formular una observación. La observación es que la Corte Penal Internacional no está cumpliendo con sus obligaciones porque en su liderazgo, en su personal profesional esencial, en su financiación y en sus operaciones trata de representar un paradigma en materia de ética, moral, valores y jurisprudencia que representa a un sector de la Asamblea de los Estados Partes.

La Corte Penal Internacional se creó como una institución internacional destinada a trabajar para todos los Estados miembros signatarios, independientemente del tamaño, la riqueza y la estructura política. Sin embargo, lo que hemos observado en la Corte, sobre todo a lo largo de los últimos cinco años, resulta seriamente perturbador. La Corte parece estar más interesada en una esfera cuasi judicial en que no busca la justicia o la lucha contra la impunidad ni está al servicio de los miembros en general, sino que parece más bien estar impulsada

por objetivos políticos y cuestiones que responden a los intereses de un pequeño grupo de Estados miembros.

En el informe se señala en el párrafo 64 que “el Estatuto de Roma nunca fue pensado para reemplazar a los tribunales nacionales.” Si bien eso es verdad, sabemos también que el Estatuto de Roma no se centra solo en la complementariedad. Más allá de la complementariedad, no se intenta en el informe beneficiar a los Estados miembros con la experiencia de la Corte relativa a la aplicación del Estatuto de Roma. Sin embargo, todos sabemos que la Corte parece incapaz de lograr la aplicación sensata e imparcial del Estatuto de Roma.

Cuando nosotros, los Estados miembros, estábamos dando forma a la Corte Penal Internacional, creíamos estar estableciendo una Corte con normas y actuaciones más estrictas que las de nuestras jurisdicciones nacionales. Sin embargo, actualmente nos sentimos abrumados por una Corte que tiene requisitos y normas inferiores a los de nuestros tribunales nacionales. Ello resulta simplemente inaceptable. Por lo tanto, creemos que el Estatuto de Roma enfrenta una prueba de veracidad, pertinencia e imparcialidad, tanto en su aplicación como en su valor, e instamos entonces a los Estados miembros, por el bien de la propia Corte, a que examinen nuevamente el Estatuto de Roma, así como su interpretación y aplicación.

Para concluir, el informe que tenemos ante nosotros, como hemos dicho antes, es una lamentable letanía de bajas ambiciones y confusión, redactada en forma de presuntas declaraciones profesionales. Los párrafos 2 a 84 del informe no amplían en nada nuestro conocimiento sobre la experiencia de la Corte. En ese informe no se incluye ninguna de las realidades y desafíos de organización que la Corte ha enfrentado al cumplir su mandato, incluida su obsesión particular y simplista en relación con las situaciones africanas. Carece de análisis y de perspectiva. El informe es un relato insatisfactorio de lo que de hecho es un fracaso institucional de proporciones históricas. Es un relato desgarrador en que las aspiraciones de millones de personas y la inversión en tiempo y decenas de millones de dólares de los Estados partes no tienen correlación alguna con los resultados de los que los miembros de la Corte Penal Internacional —y el mundo entero— pueden beneficiarse.

Si no fuera por el hecho de que los nobles objetivos del estado de derecho internacional y el imperativo histórico de nuestra época de luchar contra la impunidad fueran un requisito tan apremiante, urgente y necesario para la paz y la seguridad internacionales, sería también nuestro deber histórico poner fin a la Corte Penal Internacional, ahorrándole de esa manera las grandes miserias

que se inflige a sí misma y ahorrando decenas de millones de dólares a la comunidad internacional, logrando al mismo tiempo que las sufridas víctimas no tengan que vivir el dolor de enfrentar promesas falsas y vacías.

El Presidente (*habla en inglés*): El representante del Sudán ha solicitado hacer uso de la palabra en ejercicio del derecho de respuesta. Recuerdo a los miembros que las declaraciones formuladas en ejercicio del derecho de respuesta se limitarán a 10 minutos para la primera intervención y a cinco minutos para la segunda intervención. Las declaraciones deberán formularse desde su asiento.

Sr. Saeed (Sudán) (*habla en árabe*): Mi delegación desea ejercer su derecho de respuesta en relación con la referencia que se hace en la declaración formulada por el representante de Suecia en nombre de los países nórdicos al pedido dirigido al Gobierno del Sudán de que coopere con la Corte Penal Internacional.

Los países nórdicos parecen actuar con un espíritu de tutela. Se han impuesto como portavoces de la Corte Penal Internacional. Parecen creer que la aplicación de la justicia internacional es un deber que les pertenece. Deberían concentrarse en sus propias cuestiones y sus desafíos internos y no predicar sobre la justicia internacional en África, cerrando los ojos ante lo que ocurre en otros países del mundo. Mantienen el silencio sobre esas situaciones porque esos países que violan la justicia internacional creen que están por encima de la justicia y el estado de derecho.

El Sudán no es parte en el Estatuto de Roma y no nos preocupan los fallos de la Corte Penal Internacional. No tenemos un compromiso con la Corte en relación con la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados. La práctica de la Corte nada tiene que ver con la justicia. La Corte ha pasado a ser un instrumento para promover los conflictos internacionales. La representación de la Corte en el Consejo de Seguridad refleja dobles criterios. Una decisión del Consejo de Seguridad de remitir un país a la Corte Penal Internacional es la misma decisión que impide que otros ciudadanos acudan a la Corte. Esto es un doble criterio. Es una politización.

La Corte no es internacional porque solo es una corte para los africanos. Se centra en los dirigentes y los países africanos mientras hace caso omiso de lo que ocurre en otras partes del mundo. Esa ha sido nuestra experiencia con la Corte hasta la fecha. Las instituciones jurídicas nacionales están preocupadas por la lucha contra la impunidad, que es un propósito de la justicia internacional. Todos estamos de acuerdo en que ese principio debe aplicarse sin dobles criterios.

Se levanta la sesión a las 18.20 horas.